



**UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO**



TESIS:

**Declaración del colaborador eficaz como elemento de convicción
para la prisión preventiva y su afectación a la presunción de
inocencia**

Autor:

Bach. Leonardo Carrillo Segundo Franklin

Asesor:

Mag. Vargas Rodríguez César

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

Fecha de sustentación: 23 de agosto del 2024

LAMBAYEQUE, 2024

Tesis denominada: “Declaración del colaborador eficaz como elemento de convicción para la prisión preventiva y su afectación a la presunción de inocencia”.

Presentada para optar el TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO, por:



Bach. Leonardo Carrillo Segundo Franklin
Autor



Mag. Vargas Rodríguez César
Asesor

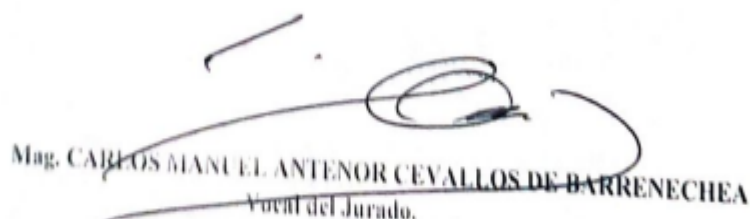
APROBADO POR:



Dr. EZEQUIEL BAUDELITO CLAVARRÍA CORREA
Presidente del Jurado



Dr. AMADOR NICOLÁS MONDÓNEDO VALLE
Secretario del Jurado



Mag. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA
Vocal del Jurado,

DEDICATORIA

El presente trabajo investigativo se lo dedico principalmente a Dios ya que sin él nada de esto hubiera sido posible, por ser el inspirador y darme fuerza para proseguir en esta fase de obtener uno de los anhelos más gratificantes que he tenido. A mis padres, Segundo y Angelita por estar siempre junto a mí en todo momento de las adversidades de la vida que me tocó afrontar, por entregarme su amor, trabajo y sacrificio en todos estos años, por los valores que me han inculcado quienes a lo largo del periplo de mi época universitaria han apoyado y motivado mi formación académica, su tenacidad y lucha interminable han hecho de ellos un ejemplo a seguir, gracias a ustedes he logrado llegar tan lejos y convertirme en lo que ahora soy, todo lo bueno que he alcanzado en gracias a ustedes, mis logros, mis triunfos y mi camino al éxito; también este trabajo de investigación va dedicado a mis hermanos por siempre ser mis ejemplos a seguir y por el apoyo incondicional que me brindaron durante todo este trayecto de mi vida.



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
UNIDAD DE INVESTIGACION



ACTA DE SUSTENTACIÓN

ACTA DE SUSTENTACIÓN PRESENCIAL N° 75-2024-UI-FDCP

Sustentación para optar el Título de ABOGADO de: **Segundo Franklin Leonardo Carrillo**.
Siendo las 12:00 m. del día viernes 23 de agosto del 2024 se reunieron en la Sala de simulación de audiencias 1 de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", los miembros del jurado evaluador de la tesis titulada: "**DECLARACIÓN DEL COLABORADOR EFICAZ COMO ELEMENTO DE CONVICCIÓN PARA LA PRISIÓN PREVENTIVA Y SU AFECTACIÓN A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**", designados por Resolución N° 192-2022-FDCP-VIRTUAL de fecha 30 de junio del 2022, con la finalidad Evaluar y Calificar la sustentación de la tesis antes mencionada, por parte de los Señores Catedráticos:

PRESIDENTE : Dr. EZEQUIEL BAUDELIO CHAVARRY CORREA.

SECRETARIO : Dr. AMADOR NICOLÁS MONDOÑEDO VALLE.

VOCAL : Mag. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA

La tesis fue asesorada por Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ, nombrado por Resolución 192-2022-FDCP-VIRTUAL de fecha 30 de junio del 2022.

El acto de sustentación fue autorizado por Resolución 496-2024-FDCP-VIRTUAL de fecha 14 de agosto del 2024.

La tesis fue presentada y sustentada por el bachiller **Segundo Franklin Leonardo Carrillo** y tuvo una duración de 30 minutos. Después de la sustentación y absueltas las preguntas y observaciones de los miembros del jurado: se procedió a la calificación respectiva, obteniendo el siguiente resultado: APROBADO con la nota de 16 (DIECISEIS) en la escala vigesimal, mención de BUENO.

Por lo que queda APTO para obtener el Título Profesional de ABOGADO, de acuerdo con la Ley Universitaria 30220 y la normatividad vigente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Siendo las 13:20 p.m., del mismo día, se da por concluido el acto académico tomando la juramentación respectiva y suscribiendo el Acta los miembros del jurado.

Lambayeque, viernes 23 de agosto del 2024

Dr. EZEQUIEL BAUDELIO CHAVARRY CORREA
Presidente del Jurado

Dr. AMADOR NICOLÁS MONDOÑEDO VALLE
Secretario del Jurado

Mag. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA
Vocal del Jurado.

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ, Asesor de Tesis de Bach. Segundo Franklin Leonardo Carrillo, titulada ***"DECLARACIÓN DEL COLABORADOR EFICAZ COMO ELEMENTO DE CONVICCIÓN PARA LA PRISIÓN PREVENTIVA Y SU AFECTACIÓN A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA"***, luego de la revisión exhaustiva del documento, constato que la misma tiene un índice de similitud de 20%(VEINTE %) verificable en el reporte de similitud del programa TURNITIN.

El suscrito analizo dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque, 06 de julio del 2023



Leonardo Carrillo Segundo Franklin

DNI 47462346, C.U. 131862-G



Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ

D.N.I.16465401

ASESOR

DECLARACIÓN DEL COLABORADOR EFICAZ COMO ELEMENTO DE CONVICCIÓN PARA LA PRISIÓN PREVENTIVA Y SU AFECTACIÓN A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

INFORME DE ORIGINALIDAD

20%

INDICE DE SIMILITUD

20%

FUENTES DE INTERNET

5%

PUBLICACIONES

8%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

hdl.handle.net

Fuente de Internet

9%

2

[Submitted to Universidad Cesar Vallejo](#)

Trabajo del estudiante

1%

3

repositorio.ucv.edu.pe

Fuente de Internet

1%

4

repositorio.unprg.edu.pe

Fuente de Internet

1%

5

repositorio.uss.edu.pe

Fuente de Internet

1%

6

repositorio.uns.edu.pe

Fuente de Internet

1%

7

repositorio.continental.edu.pe

Fuente de Internet

1%

8

www.utic.edu.py

Fuente de Internet

1%



Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ

D.N.I. 16465401

ASESOR





Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por Turnitin. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Segundo Franklin Leonardo Carrillo
Título del ejercicio: REVISIÓN DE TESIS
Título de la entrega: DECLARACIÓN DEL COLABORADOR EFICAZ COMO ELEMENT...
Nombre del archivo: INFORME_FINAL_FRANKLIN_LEONARDO_29.05.23_1.docx
Tamaño del archivo: 356.39K
Total páginas: 89
Total de palabras: 24,556
Total de caracteres: 134,691
Fecha de entrega: 28-jun.-2023 04:58p. m. (UTC-0500)
Identificador de la entrega... 2124097268



FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

INFORME FINAL DE TESIS
TÍTULO:

DECLARACIÓN DEL COLABORADOR EFICAZ COMO ELEMENTO
DE CONVICCIÓN PARA LA PRISIÓN PREVENTIVA Y SU
AFECTACIÓN A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

AUTOR:
LEONARDO CARRILLO, Segundo Franklin

ASESOR:
Dr. VARGAS RODRÍGUEZ, César

LINEA DE INVESTIGACIÓN
DERECHO PENAL

LUGAR
PROVINCIA DE CHICLAYO
LAMBAYEQUE - 2023



Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ
D.N.I.16465401
ASESOR

Índice de contenidos

Índice de Tablas.....	v
Índice de figuras.....	vi
RESUMEN	vii
ABSTRACT	viii
I. INTRODUCCIÓN	9
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA	9
1.2. OBJETO DE ESTUDIO	9
1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	10
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	12
1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO	13
1.6. OBJETIVOS	14
1.7. HIPÓTESIS	14
II. DISEÑO TEÓRICO	16
2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA	16
2.2. BASES TEÓRICAS	21
III. DISEÑO METODOLÓGICO.....	48
3.1. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS	48
3.2. VARIABLES	48
3.3. POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD DE ANÁLISIS.....	49
3.4. MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.....	49
3.5. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS.....	49
3.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS	50
IV. RESULTADOS.....	51
V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.....	71
5.1. Discusión de resultados y contrastación de hipótesis	71
CONCLUSIONES	82
RECOMENDACIONES	84
REFERENCIAS.....	85
ANEXOS	88

Índice de Tablas

Tabla 01: Operacionalización de variables.....	48
Tabla 02: Colaboración eficaz	51
Tabla 03: Fundamento constitucional de la colaboración eficaz	53
Tabla 04: Atribución constitucional del fiscal en la colaboración eficaz.....	54
Tabla 05: Alcances de la atribución del fiscal en la colaboración eficaz	56
Tabla 06: Carga de la prueba del colaborador eficaz.....	57
Tabla 07: Valor probatorio de la versión del aspirante a colaborador para dictar prisión preventiva	59
Tabla 08: Valor probatorio de la versión del colaborador para dictar prisión preventiva.....	60
Tabla 09: Motivo prevalente de la ineficacia del valor probatorio de la versión del aspirante o colaborador para dictar prisión preventiva.....	62
Tabla 10: El Juez de investigación preparatoria y la declaración del aspirante a colaborador	63
Tabla 11: El Juez de investigación preparatoria y la declaración del colaborador	65
Tabla 12: La presunción de inocencia.....	66
Tabla 13: La presunción de inocencia y la declaración del aspirante a colaborador en la prisión preventiva	68
Tabla 14: La presunción de inocencia y la declaración del colaborador en la prisión preventiva.....	69

Índice de figuras

Figura 01: Colaboración eficaz.....	52
Figura 02: Fundamento constitucional de la colaboración eficaz	54
Figura 03: Atribución constitucional del fiscal en la colaboración eficaz	55
Figura 04: Alcances de la atribución del fiscal en la colaboración eficaz	57
Figura 05: Carga de la prueba del colaborador eficaz.....	58
Figura 06: Carga de la prueba del colaborador eficaz.....	60
Figura 07: Valor probatorio de la versión del colaborador para dictar prisión preventiva.....	61
Figura 08: Motivo prevalente de la ineficacia del valor probatorio de la versión del aspirante o colaborador para dictar prisión preventiva	63
Figura 09: El Juez de investigación preparatoria y la declaración del aspirante a colaborador	64
Figura 10: El Juez de investigación preparatoria y la declaración del colaborador	66
Figura 11: La presunción de inocencia.....	67
Figura 12: La presunción de inocencia y la declaración del aspirante a colaborador en la prisión preventiva	69
Figura 13: La presunción de inocencia y la declaración del colaborador en la prisión preventiva.....	70

RESUMEN

La presente investigación analiza el problema de las delaciones que se producen en los procesos de colaboración eficaz y como vienen siendo utilizadas por el Ministerio Público para solicitar prisión preventiva y los órganos jurisdiccionales para otorgarlas, sin que se precisen de manera adecuada que la corroboración no debe concretarse por otra declaración de delatores, en razón de lo cual, se viene afectando la denominada presunción de inocencia, en la cual se plantea como objetivo general el determinar si la aplicación del artículo 158° inciso 2 del Código Procesal Penal, respecto a la valoración de las declaraciones de aspirantes a colaborador eficaz en la prisión preventiva afecta el principio de presunción de inocencia, investigación de enfoque cuantitativo que tras la aplicación de las encuestas a la muestra conformada por 50 especialistas en materia de derecho penal entre los cuales se hayan magistrados, es decir Jueces y Fiscales penales de la ciudad de Chiclayo, además de abogados de la defensa, a quienes se procederá a aplicar encuestas innominadas y entrevistas, para obtener mayores datos estadísticos, conforme al sustento teórico a desarrollar en la investigación, ha permitido concluir que la aplicación del artículo 158° inciso 2 del Código Procesal Penal, respecto a la valoración de las declaraciones de aspirantes a colaborador eficaz en la prisión preventiva afecta el principio de presunción de inocencia, por cuanto siendo éste último una garantía de la función jurisdiccional actualmente se constituye como una regla judicial que ante el requerimiento de prisión preventiva se declaren fundados con las declaraciones brindadas en los procesos de delación, llámese tanto de aspirantes como de colaboradores calificados, presentándose la afectación a la expresada garantía debido a que ni la declaración del aspirante a colaborador como del propio colaborador garantizan su veracidad por falencias en el proceso de corroboración debido a que el procedimiento como tal no asegura que los elementos corroborativos sean de índole material, porque pueden ser incluso otras declaraciones de otros colaboradores que pueden tener versiones contradictorias.

Palabras claves: Colaborador eficaz, declaración, corroboración, presunción de inocencia, prisión preventiva.

ABSTRACT

The present investigation analyzes the problem of denunciations that occur in effective collaboration processes and how they have been used by the Public Ministry to request preventive detention and the jurisdictional bodies to grant them, without adequately specifying that the corroboration should not be materialized by another declaration of informers, due to which, the so-called presumption of innocence is being affected, in which the general objective is to determine if the application of article 158, paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure, regarding the assessment of the statements of applicants for effective collaborator in preventive detention affects the principle of presumption of innocence, research with a quantitative approach that after the application of the surveys to the sample made up of 50 specialists in criminal law, including magistrates, that is to say Judges and Criminal Prosecutors of the city of Chiclayo, in addition to lawyers defense attorneys, to whom unnamed surveys and interviews will be applied, to obtain more statistical data, according to the theoretical support to be developed in the investigation, has led to the conclusion that the application of article 158, paragraph 2 of the Criminal Procedure Code, regarding The assessment of the statements of applicants for effective collaborator in pretrial detention is affected by the principle of presumption of innocence, since the latter is a guarantee of the jurisdictional function, currently it is constituted as a judicial rule that before the requirement of pretrial detention, they declare themselves based on the statements provided in the denunciation processes, call both applicants and qualified collaborators, presenting the affectation to the expressed guarantee because neither the declaration of the applicant collaborator nor the collaborator himself guarantee its veracity due to flaws in the process of corroboration because the procedure as This does not ensure that the corroborative elements are of a material nature, because they may even be other statements from other collaborators who may have contradictory versions.

Keywords: Effective collaborator, statement, corroboration, presumption of innocence, preventive detention.

I. INTRODUCCIÓN

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA

En la actualidad existe una creciente preocupación por parte de los organismos internacionales porque en Perú hay una tendencia que se ha convertido en una regla contrario sensu de lo que resultaría aplicarla, siendo una clara mención a la tan conocida prisión preventiva, dado que dicha medida de coerción nació para ser una excepción y no convertirse en una línea directriz para comprobar la teoría de caso.

Tal disyuntiva en el contexto aplicativo resultaría idónea si acaso se reducen los índices de criminalidad cada vez tan crecientes, pero ello no justifica sacrificar la inocencia que muchas veces se ha visto apabullada por los acuerdos entre delatores que buscan obtener beneficios a su favor y el Ministerio Público.

A nivel internacional estudios han demostrado que entre las décadas de los años 80 a 90 ya la prisión preventiva se había convertido en la esencia del proceso penal relegando a un segundo plano a la propia condena, desconfigurando la naturaleza de la dicha institución procesal.

Aun cuando en aquellas épocas la delación no era siquiera una institución reconocida como lo es hoy, ya la prisión preventiva se ligaba a otras instituciones que se daban dentro del proceso, como lo era en esos momentos la confesión sincera y el reconocimiento de los cargos.

Ahora, los tiempos han cambiado, no sólo se obtienen resoluciones que otorgan prisión preventiva en base a una confesión sino que se obtienen con delaciones o conocidas en el medio como colaboraciones eficaces como elementos sustanciales para conceder las prisiones, sobre todo en los casos vinculados a organizaciones criminales.

1.2. OBJETO DE ESTUDIO

Advirtiendo y continuando con las pautas y lineamientos metodológicos, con la presente investigación se busca determinar si la aplicación del artículo 158° inciso 2 del Código Procesal Penal, respecto a la valoración de las declaraciones de aspirantes a colaborador eficaz en la prisión preventiva afecta el principio de presunción de inocencia, dado que solo usa el término corroborar pero no indica que necesariamente tiene que ser prueba material y no solo referencial como se ha venido practicando actualmente, por lo que tal vacío, sin ser aclarado impide que la

corroboración sea realmente una actuación procesal material y no solo de índole formal, que puede incluso sostenerse en meras versiones.

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Muchas veces se ha utilizado a los miembros de un grupo u organización criminal para golpear y adquirir elementos que permitan derribarla cobrando relevancia lo que Bentham acuñó sobre aquello en cuanto precisa que “es preferible la impunidad de uno de los cómplices que la de todos”, razón por la que la colaboración eficaz ha tomado relevancia jurídica como manifestación de un derecho penal premial que se constituye como una relevante herramienta contra la criminalidad en particular. A nivel internacional se sabe que ha servido de sustento para derribar grandes organizaciones en Italia, en los mismos Estados Unidos así como en Colombia, lo que también ha ocurrido en nuestro país, dado que la experiencia peruana, permite colegir que desde que se logró capturar al líder senderista Abimael Guzmán Reynoso con la colaboración de un mando senderista se supo que en realidad la colaboración eficaz si sirve cuando ha sido efectivamente corroborada.

Lo que ocurre en la actualidad es que existen aspirantes a colaboradores que “declaran” dentro del marco de aquel proceso especial y que muchas veces son utilizadas dentro de los requerimiento de prisión preventiva y son positivamente valorados en aquel proceso dando como resultado la imposición de las medidas gravosas aun cuando la eficacia e importancia de la figura de la colaboración eficaz o delación premiada, en la lucha contra la criminalidad organizada debe considerarse como una declaración que goza de una poquísima fiabilidad en comparación con las declaraciones de un testigo cualquiera, toda vez que tales colaboradores no tienen la obligación de decir la verdad, así también les corresponde el derecho de no autoincriminación, además que su declaración esta motivada por una finalidad auto-exculpatoria u otra igualmente espuria, a lo que se suma que por la reserva del proceso, el abogado defensor no tiene la posibilidad de ejercer la contradicción.

Así, actualmente se viene utilizando a las declaraciones de los aspirantes a colaborador eficaz como elementos de convicción relativamente suficientes para imponer una medida de prisión preventiva porque según el artículo 158 del Código Procesal Penal no se hace un distingo entre colaborador y aspirante a colaborador

y solo exige un mínimo de corroboración que puede ser otra declaración de otro colaborador incluso porque no lo prohíbe para imponer la medida, pero en efecto ¿ello es correcto?

El expresado artículo 158 del Código Procesal Penal indica lo siguiente:

Artículo 158.- Valoración

1. En la valoración de la prueba el Juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, y expondrá los resultados obtenidos y los criterios adoptados.
2. En los supuestos de testigos de referencia, declaración de arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas, sólo con otras pruebas que corroboren sus testimonios se podrá imponer al imputado una medida coercitiva o dictar en su contra sentencia condenatoria.
3. La prueba por indicios requiere:
 - a) Que el indicio esté probado;
 - b) Que la inferencia esté basada en las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia;
 - c) Que cuando se trate de indicios contingentes, éstos sean plurales, concordantes y convergentes, así como que no se presenten contraindicios consistentes.

De la redacción indicada se precisa que la declaración solo necesita un mínimo de corroboración que como se ha dicho podría ser otra declaración y al final solo por versiones se impondría la medida porque no se exige que la prueba que lo corrobore sea un documental, digital u de índole distinta a un testimonio que es considerado como una prueba indirecta, por lo tanto, se estaría ante una medida impuesta solo por versiones, incluso considerando una declaración de un aspirante a colaborador.

En un proceso de colaboración eficaz que por ser un procedimiento especial tiene sus etapas, una de ellas es la corroboración, surgiendo aquí una interrogante ¿qué pasa si una declaración de este tipo no puede ser corroborada con una prueba documental o de índole distinta a una declaración?, tanto porque es falsa, o porque los elementos periféricos ya no existen, de hecho que primaria la presunción de inocencia de quien se imputa la comisión de un delito, siendo así proponemos que la declaración de un colaborador eficaz no resulta suficiente para surgir como un elemento de convicción dado que la redacción así como de forma expresa está indicada no excluye a otra testimonial lo que significa en estricto que bastan dos declaraciones para imponer una prisión preventiva.

El dilema resultante se complica por el hecho de que, con la entrada en vigor del Código Procesal Penal de 2004, se menciona en la Sección VI del Libro Quinto

(Capítulos 472° a 481°) un proceso especial de colaboración eficaz, aplicable a diversas delitos tales como: asociación ilícita (hoy es absorbida por el llamado crimen organizado), terrorismo, lavado de activos, delitos informáticos, delitos de lesa humanidad, secuestro agravado, robo agravado, hurto agravado, delitos de dinero y tráfico ilícito de drogas, especificación y/ o condicional, mientras el agente actúe como partícipe de la organización criminal.

Por otro lado, las normas del Código Procesal Penal del 2004 respecto a colaboración eficaz fueron modificadas por el Decreto Legislativo N° 1301, “que incorporó tres nuevas disposiciones; es decir, los artículos 473-A, 476-A y 481-A, siendo que las dos últimas confieren un mayor alcance y eficacia probatoria a las actuaciones probatorias del procedimiento de colaboración eficaz, tanto para su uso en los procesos derivados como conexos al mismo” (Talavera, 2018, p. 244), es decir, que así como esta redactada la norma implica una seria contravención al principio de presunción de inocencia.

Sobre la colaboración eficaz Castillo (2018), define la define como:

Un trato y un negocio jurídico que el Estado realiza, a través de sus funcionarios (fiscales), con los criminales a fin de que a cambio de información pertinente y útil sobre la intervención de terceros en la comisión de hechos punibles los delatores logren obtener ciertos beneficios, tales como, la exención de la pena, pena atenuada o determinadas condiciones de ejecución de la pena. (p. 313)

Por otro lado, San Martín (2015) reporta que la colaboración eficaz es:

Un mecanismo de la justicia penal negociada... que descansa en la figura del arrepentido, quien debe admitir o, en todo caso, no contradecir ante la autoridad los hechos delictivos que se le atribuyen, y proporcionar información suficiente, eficaz e importante en orden a neutralizar una actividad delictiva, identificar las lógicas de actuación criminal de una organización delictiva y a sus intervinientes, y/o entregar bienes delictivos o ubicar su destino o paradero. (p. 871)

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿La aplicación del artículo 158° inciso 2 del Código Procesal Penal, respecto a la valoración de las declaraciones de aspirantes a colaborador eficaz para imponer una prisión preventiva, afecta el principio de presunción de inocencia?.

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

La investigación se justifica en tres contextos, el teórico, el metodológico y el práctico.

En el contexto teórico la investigación se justifica porque ha permitido ampliar conceptos que han servido de base para sustentarla como lo es la prisión preventiva y su naturaleza cautelar, asimismo la presunción de inocencia desde su fundamento constitucional, desarrollando posiciones doctrinarias que analizan por qué dicho principio es anterior a la configuración legal que supone ser la prisión preventiva, uniendo ambos aspectos teóricos dentro del proceso especial de colaboración eficaz, que en su contexto integral ha servido para delimitar que la prisión preventiva cuando se justifica solo con la declaración de aspirantes a colaboradores se torna arbitraria, por ende, la investigación se encuentra justificada porque teoriza aspectos vinculados con el quehacer jurisdiccional que ocurre a diario.

A su vez, en el contexto metodológico la investigación se justifica debido a que se responde al ¿Por qué se debe estudiar la afectación del principio de presunción de inocencia si se otorga una medida de prisión con las declaraciones de los colaboradores?, siendo así, debe indicarse que el objeto bajo estudio resulta importante porque la colaboración eficaz es una institución que sirve para una tesis fiscal, por ende, el ordenamiento debe estar uniformizado metodológicamente dado que un sistema u ordenamiento jurídico no debe contener antinomias como lo es, que la significancia de la prisión preventiva no debe afectar la presunción de inocencia que está en un nivel supra legal por tener fundamento constitucional, siendo así, la investigación demuestra que primero está la presunción de inocencia, que solo puede afectarse con una convicción suficiente que permite romper la protección que genera la presunción y tras de sí, aquellos elementos de convicción que no solo se corresponderían con corroboraciones sino que se sirven de una inmutabilidad probatoria, es decir no puede cambiar con el transcurrir del tiempo.

En el plano o contexto práctico, la investigación se justifica debido a que permitirá, sobre todo, al operador jurídico de la defensa hacer uso de una herramienta potente

que le permita evitar que los “dichos” se institucionalicen como fuentes de convicción y se asegure con ello que cuando se otorga una medida de prisión, ésta se funde en una sospecha más que suficiente, lo que por el otro lado, es decir, desde la perspectiva fiscal, lograr una fuerte convicción sobre la culpabilidad de quien se le atribuye la comisión de un delito que amerite prisión, por lo cual, resulta práctico contar con aspectos delimitativos que permitan una comprensión, sobre todo objetiva de lo que se debe acumular para que una prisión se funde en un sistema de subordinación constitucional es que las declaraciones deben estar corroboradas no con otras declaraciones sino con elementos objetivos que otorguen fuerza a la imputación que se formula.

1.6. OBJETIVOS

1.6.1. Objetivo General

Determinar si la aplicación del artículo 158° inciso 2 del Código Procesal Penal, respecto a la valoración de las declaraciones de aspirantes a colaborador eficaz en la prisión preventiva afecta el principio de presunción de inocencia.

1.6.2. Objetivos específicos

- a)** Analizar los alcances del artículo 158° inciso 2 del Código Procesal Penal
- b)** Establecer si el actual estándar de corroboración establecido en el código procesal penal en las declaraciones de aspirantes a colaborador eficaz para la imposición de prisión preventiva es el adecuado.
- c)** Analizar los alcances del principio de presunción de inocencia.

1.7. HIPOTESIS

Sampieri et al (2004), indican que una hipótesis de la investigación está dirigida a probar y buscar aquella explicación que en grado de tentativa proponga una probable respuesta del fenómeno que se propone, en tal sentido, la respuesta tentativa a la pregunta problemática planteada es la siguiente:

Hi: Si la aplicación adecuada del artículo 158 inciso 2 del Código Procesal Penal, consiste en una corroboración de la declaración del colaborador que excluya otras declaraciones entonces se evitará afectar el principio de presunción de inocencia.

H0: Si la aplicación adecuada del artículo 158 inciso 2 del Código Procesal Penal, **NO** consiste en una corroboración de la declaración del colaborador que excluya otras declaraciones entonces no se evitará afectar el principio de presunción de inocencia.

II. DISEÑO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

A Nivel Internacional

Fernández (2018) en la investigación denominada Prisión preventiva oficiosa y principio de presunción de inocencia, cuyo objetivo fue definir los temas de Prisión Preventiva Oficiosa y Principio de Presunción de Inocencia analizando de fondo la problemática entre la Prisión Preventiva y el Principio de Presunción de Inocencia, para lo cual, aplicó la técnica de encuesta con cuestionario, concluye que Las prisiones preventivas informales son una medida prevista por la legislación mexicana para garantizar la presencia de personas sujetas a un procedimiento que, mediante la privación de libertad, no solo vulnera derechos fundamentales, sino que viola uno de los aspectos más importantes del principio de todo delito posible. , que se considera penal según la ley, es el principio de presunción de inocencia, que es más importante porque está incorporado en las normas internacionales y se tiene en cuenta.

El autor trata un tema relevante para la presente investigación, esto es, lo atinente a la presunción de inocencia que es una garantía inserta en los tratados internacionales, por tanto, no es una minucia su consideración en los momentos en los que se decida una prisión preventiva solo con declaraciones de los colaboradores eficaces.

Paéz (2017), en la legislación de Ecuador, la figura se denomina “cooperación eficaz” se encuentra regulada en el art. 491º del Código Orgánico Integral Penal como “(...) el acuerdo de suministros de datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan necesariamente al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables o sirvan para prevenir, neutralizar o impedir la perpetración o consumación de otros delitos de igual o mayor gravedad” por lo que, la lucha contra los delitos de narcotráfico y otras actividades delictivas como la corrupción es de gran importancia, pero los autores señalan que se basa en el pragmatismo y no tiene en cuenta cuestiones como el otorgamiento de discrecionalidad penal, criterios de evaluación, etc. validez de la información proporcionada por los socios comerciales. Cabe señalar que este número legal es importante en la lucha contra la delincuencia, especialmente el crimen organizado,

y los legisladores vieron el éxito con el número 16, pero los demás integrantes, según indicaron excolaboradores, deben estar en el marco del debido proceso. para que sean juzgados por sus acciones.

En dicha investigación se evidencia que la colaboración eficaz o cooperación eficaz conocida en el país ecuatoriano sirve para cumplir la finalidad de combatir las bandas organizadas, aunque no ahonda en el tema de posibles afectaciones a derechos fundamentales, es correcto afirmar que si evalúa la discrecionalidad existente al momento de evaluar sobre la eficacia o no de lo que es informado por el colaborador eficaz.

De Oliveira (2014), reporta que Brasil ha incorporado la Convención de los derechos humanos a su ordenamiento jurídico en 2004 por Decreto 5015; sin embargo, esta norma no es nueva, pues ya habían legislador beneficios premiales por delitos graves desde 1990. Los cambios en la ley brasileña con respecto a las delaciones premiadas fueron posteriormente formalizados por la Ley N° 12.850 de agosto de 2013 lo que brindó mayor fortaleza a dicha figura jurídica, dando una mayor seguridad para los colaboradores, y los beneficios se aplican a los empleados, colaboradores asociados a delitos cometidos por organizaciones criminales o delitos definidos en tratados internacionales ratificados por Brasil. Entre lo relevante de las conclusiones a las que aborda el autor de la investigación es que la delación premiada ha servido para combatir las organizaciones criminales, que a la fecha ha cumplido con su finalidad.

La investigación reportada aporta a la propuesta investigativa debido a que se estudia una de las variables sometidas a análisis y estudio, la cual es la delación premiada denominada en el Estado Federado de Brasil y conocida en el medio jurídico peruano como colaboración eficaz.

A nivel Nacional se han ubicado las siguientes:

Avellaneda (2020) en la investigación dirigida a establecer el efecto restrictivo del decreto legislativo No 1301 en el proceso de cooperación efectiva no afecta el derecho de defensa de los coinvestigados señalados en la declaración. La investigación se llevó a cabo de conformidad con la Ley Procesal Penal de 2004 y el Decreto Legislativo No 1301 y sus disposiciones, Decreto Supremo núm. 007-2017-JUS, sobre principios estatales y actos jurídicos. Debe mencionarse que el expresado decreto hace más eficientes los procedimientos especiales, aunque a

expensas de elementos ad hoc, como fijar un plazo para su desarrollo al menos tan largo como el de un procedimiento especial orientado a la "eficiencia" investigativa. Un proceso diseñado para hacer que las encuestas sean más fáciles y rápidas con el tiempo. Por otro lado, la declaración de cooperación efectiva analiza las deficiencias legislativas de la aplicación del procedimiento de cooperación efectiva y la posible lesión de los derechos de defensa de los coacusados. Se afectó el derecho de defensa de los coimputados en la declaración del colaborador. El tipo de investigación que se utiliza a nivel proposicional utilizando un diseño de métodos mixtos es "no experimental-descriptivo transversal" debido a que la información se recolecta a partir de un cuestionario que se utiliza sobre una muestra seleccionada en un estudio que tiene como objetivo confirmar hipótesis. El mencionado estudio concluyó que la base teórica y jurídica de las doctrinas nacionales y comparadas relacionadas con el derecho a la defensa de los coacusados demuestra que el derecho a la defensa es una manifestación clara de un juicio justo y una garantía de protección. Las normas constitucionales y los convenios internacionales, que deben ser implementados en todas las etapas del proceso penal, exigen por tanto el respeto irrestricto del derecho a la defensa de toda persona involucrada en el proceso, incluso desde el hecho de que la persona sea acusada o acusada de cometer o participar en hechos delictivos, a fin de que puedan participar activamente en todas las acciones procesales para implementar su protección material y técnica para la protección de sus derechos e intereses. Finalmente, se considera procedente la propuesta de reforma de los artículos 473, 476, 481-A del código procesal penal.

La reportada investigación resulta relevante para la investigación puesto que ha estudiado una de las variables que es la relacionada a la colaboración eficaz en el caso del antecedente aludido incluso cuestionando el decreto legislativo No 1301 que amplió los alcances de los beneficiarios de dicha institución procesal.

Sumarán (2019) en la investigación que tuvo como propósito general, determinar la forma de aplicar el artículo 158 numeral 1 del artículo 2 de la Ley de Procedimiento Penal, que se refiere a la evaluación de las declaraciones de los solicitantes como colaboradores efectivos en los tribunales penales y las decisiones judiciales penales en materia de prisión preventiva ante los tribunales de La Libertad por el periodo 2016-2018 y su incidencia en la presunción de inocencia. Dicha

investigación a fin de despejar el objetivo aludido ha sido de enfoque cualitativo al haber analizado las resoluciones judiciales concernientes a la prisión preventiva que se han emitido en los juzgados de investigación preparatoria de La Libertad y los pronunciamientos materia de impugnación resueltos en sede de segunda instancia. Así, luego de haber evaluado la incidencia de la colaboración eficaz para la imposición de la medida cautelar personal se ha obtenido como principal conclusión que la aplicación del código procesal penal en su artículo 158, numeral 2, información sobre la evaluación del solicitante para cooperar efectivamente con las decisiones judiciales sobre prisión preventiva emitidas por el tribunal de investigación preparatoria y el tribunal de apelación en casos penales, que no exige criterios de "suficiente corroboración" lo cual afecta el principio de presunción de inocencia, es decir los elementos de prueba suficientes para integrar su contenido básico, la misma creencia y sospecha grave establecido en el artículo 268 literal a) del Código procesal Penal contenida en la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433.

Lo que el autor despeja es lo que en realidad ocurre, la significancia de una valoración probatoria no esta desarrollada en el sistema judicial peruano, no se entiende como es que debe llegarse a la denominada corroboración suficiente, desconociéndose los sistemas de valoración probatoria en lo que en su concepción se reconoce que no son más que la concepción persuasiva y la racional; en tal sentido, si sólo se opta por superficialmente cumplir reglas mínimas de valoración, no se va a derribar la presunción de inocencia, lo cual significa que los órganos jurisdiccionales en la actualidad solo están resolviendo a su libre y sano entender de la vinculación del investigado con el delito, más no en base a una técnica propia del derecho a la valoración probatoria que debe primar para satisfacer en lo penal que inciden en que los hechos así como han sido imputados, en realidad así se han producido.

De Gennaro-Dyer (2018) en la investigación dirigida a determinar las perspectivas sobre la colaboración eficaz de personas jurídicas, de tipo básica descriptiva, de enfoque cualitativo, se colige que el autor en el acápite 1.5) aborda el tema de "La utilización de la declaración eficaz a la luz de los alcances del Acuerdo Plenario 02-2017-SPN", siendo que el objetivo (acuerdo entre el ministerio público y colaboración eficaz) el voto mayoritario del citado acuerdo plenario, precisa que

debe estar presente el requisito de la triple aprobación, y la exigencia de medios coercitivos (debería agregarse un elemento de aprobación del proceso de cooperación efectiva). En última instancia, corresponde al juez sopesar estos elementos junto con los elementos de la sentencia en el proceso de admisión para determinar si existe una sospecha grave y decidir por sí mismo si se deben aplicar medidas coercitivas. “dicho voto en mayoría es acertado en la medida que resalta la importancia del reconocimiento de que la sola declaración del colaborador no puede ser empleada para requerir la imposición de una medida de naturaleza coercitiva, siendo que además constituye un aspecto fundamental, dado que en la práctica han existido casos en donde el órgano jurisdiccional en colaboración con el Ministerio Público ha impuesto este tipo de medidas sobre la base de una declaración y no mucho más. Asimismo, dicho autor señala que el Acuerdo Plenario in comento brinda un importante lineamiento para evitar que la colaboración eficaz sea utilizada de forma incorrecta, y termine vulnerando los derechos de las otras personas implicadas en el proceso penal. La investigación permite al autor concluir que dicho apartado establece que al fiscal le corresponde postular no solo la declaración del aspirante a colaboración eficaz, sino también todos los elementos de convicción que corroboren su contenido, implicando ello que el representante del Ministerio Público deberá investigar rigurosamente la veracidad de las afirmaciones realizadas por el aspirante a colaborador y requerir a este la aportación de todo tipo de material que pudiese ser utilizado para sustentar sus afirmaciones”.

Estos antecedentes son importantes para la presente investigación por dos puntos específicos, el primero se basa en que analiza el acuerdo plenario 02-2017-SPN, que también es objeto de análisis de este estudio. y la otra se basa en que los autores de los artículos defendieron el voto mayoritario en el acuerdo plenario 02-2017-SPN en los comentarios, lo que da una base para el respeto, al igual que los autores antes mencionados, el presente estudio está enfocado o una parte del voto de la mayoría sobre las directrices de la sesión plenaria, si simplemente cree que es correcto

A nivel local se han hallado las siguientes:

Mondragón (2019) en la tesis para obtener el título de abogado por la Universidad Particular de Chiclayo dirigida a establecer cuál es el valor probatorio que se le

debe proporcionar a las delaciones brindadas dentro de un proceso de colaboración eficaz, cuyo enfoque ha sido de corte cuantitativo descriptivo argumentó en sus conclusiones que las declaraciones de los colaboradores tenían valor probatorio luego de pasar la etapa de corroboración y aprobación. Esto enfatiza la importancia de la corroboración y que es necesaria antes de que pueda ser utilizada en otros procesos judiciales y que si no se prueba, no puede menoscabar la presunción de inocencia de los coacusados.

Ahí se advierte una investigación con un aparente alcance para la presente dado que si bien el autor expresamente indica que solo con la corroboración se obtiene la calidad valorativa

Horna (2018) en su tesis titulada La aplicación del proceso de colaboración eficaz en el distrito judicial de Lambayeque en los años 2016 – 2017, para optar el título de abogado de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo concluye lo siguiente:

se pudo obtener que se ha demostrado, que se cuestiona al Estado que este premie y otorgue beneficios a un imputado, es decir, a personas responsables penalmente, que incriminan a otra u otras con la intención de evadir su responsabilidad. El autor no niega que el proceso produzca resultados buenos frente al crimen organizado; sin embargo, también señala que se debería evitar las graves deficiencias que tiene el decreto para que se evite la vulneración de derechos del coimputado. (p. 121)

En la reportada investigación el autor evidencia que las declaraciones de los colaboradores constituyen una suerte de salida de los imputados para evitar una medida gravosa como es la prisión preventiva, surgiendo ahí una interrogante, que tan cierta es la declaración si responde a evitar una extrema medida.

2.2. BASES TEÓRICAS

Para lograr los objetivos propuestos en la presente investigación jurídica, se elaborará el marco teórico teniendo en cuenta los diversos aspectos relacionados, en primer término, a la evolución histórica de la Prisión Preventiva, posteriormente se desarrollará lo concerniente a los presupuestos procesales para imponer la prisión, con especial referencia a la naturaleza jurídica de tales presupuestos, así como la presunción de inocencia.

3.2.1. La Prisión Preventiva

Sobre la prisión preventiva o provisional el autor Mellado (2005) ha precisado que:

En la doctrina procesal, la prisión preventiva constituye una medida cautelar de carácter personal cuya finalidad acorde con su naturaleza, es la de garantizar el proceso en sus fines característicos y el cumplimiento de la futura y eventual pena que pudiera imponerse. No puede asignarse a esta medida una naturaleza tal que la haga devenir en una medida de seguridad o, incluso, en una pena anticipada debemos precisar que consiste en la obligación que recae sobre una persona de reparar el daño que ha causado a otro, sea en naturaleza o bien por un equivalente monetario. (p. 493)

Aquí el autor se refiere a la garantía del desarrollo del proceso penal y la ejecución de futuras sentencias, es decir, la proyección desde el punto de vista procesal y material. Si se comprueba que la vulneración de la presunción de inocencia no puede constituir una condena anticipada, creemos que ello se debe a que la medida está sujeta a las reglas de legalidad, proporcionalidad, temporalidad y variabilidad. En la misma línea Roxin (2000) considera que:

La finalidad de la prisión preventiva es asegurar el proceso de conocimiento o la ejecución de la pena. Y que sirve a tres objetivos 1) asegurar la presencia del imputado en el procedimiento penal, 2) garantizar una investigación de los hechos en forma debida por la fiscalía y 3) asegurar la ejecución de la pena. (p. 257)

Moreno (2008) reporta que el proceso penal es una herramienta jurídica fundamental para la aplicación del derecho penal, y si se quiere perseguir un delito, es una herramienta imprescindible (pp. 75-76). Al mismo tiempo, puede ser un área de gran tensión entre la necesidad de seguridad de los ciudadanos y las libertades de los afectados por el proceso. El proceso penal es un valor que debe velar por la seguridad ciudadana, y es un valor que se protege especialmente porque es precisamente el último componente de las medidas de política criminal que deben adoptar los poderes públicos para combatir la delincuencia. Pero también debe proteger los derechos de quienes son objeto de un proceso penal, porque si alguien es señalado como imputado, su libertad aparece gravemente amenazada, y la libertad es un valor político y un conjunto de derechos que son derechos civiles por razón de sanciones finalmente impuesta y la libertad se encuentra en riesgo por las medidas preventivas y de investigación que puedan ser aplicadas durante el

proceso. Desde el momento en que se restringe la libertad individual, no hay límites, quién decide sobre la prisión, pero luego el gran principio de la libertad individual impregna el caso, según el cual se debe elaborar el presupuesto para las medidas preventivas. en última instancia, dar a las autoridades judiciales un poder sin restricciones para anular. La libertad del imputado durante el juicio y la garantía del proceso investigativo en el que puedan verse afectados determinados bienes jurídicos. En nuestra jurisprudencia, la prisión preventiva es considerada una decisión puramente procesal. Para los funcionarios judiciales, la prisión preventiva es diferente a las órdenes de arresto. Es dictada por el juez de investigación preparatoria a requerimiento del Ministerio Público y tiene lugar en audiencias judiciales públicas o privadas. Examen de causas de investigación criminal. En estos casos, los principios orales, inmediatos y públicos son determinantes, con ciertas excepciones.

Moreno (2008) indica que por lo tanto, desde perspectiva judicial toda medida de prisión preventiva tiene las siguientes características:

Es una medida excepcional: La detención de un imputado es la excepción, siendo la regla general la de ser procesado con una medida menos gravosa como es el de comparecencia con restricciones, como: no cambiar de domicilio ni ausentarse de él sin conocimiento y autorización del juez; concurrir a todas las diligencias en los días en que se le cite por parte de la autoridad judicial o por el Ministerio Público; la prohibición de concurrir a determinados lugares de dudosa reputación en donde se vende alcohol o drogas; las prohibición de comunicarse con determinadas personas, como por ejemplo la víctima, siempre que no afecte el derecho de defensa. (p. 88)

Es una medida provisional: Es decir, no es definitiva y se dicta por un plazo, que no durará más de nueve meses o más de dieciocho meses tratándose procesos complejos. Esto quiere decir que vencido el plazo, sin haberse dictado sentencia de primera instancia, el Juez de oficio o a solicitud de las partes decretará la inmediata libertad del imputado, sin perjuicio que se dicte medidas necesarias para asegurar su presencia en las diligencias judiciales. (p. 88)

Es una medida variable: Como toda medida cautelar, pues está sujeta a cambios; es decir, puede cesar si nuevos elementos de convicción demuestran que no concurren los motivos que determinaron su imposición y resulta necesario sustituirla por una medida de menos gravedad. Esto se conoce como cesación de la prisión preventiva. Si nuevos elementos de convicción ponen en

cuestión los primeros es evidente que la medida ya no resulta razonable mantenerla y debe ser sustituida. Para tal caso el Juez, debe tener en consideración, adicionalmente, las características personales del imputado, el tiempo transcurrido desde la privación de libertad y el estado de la causa. (p. 88)

Los presupuestos procesales de la prisión preventiva los hallamos en el artículo 268° del Nuevo Código Procesal Penal que estipula lo siguiente: “presupuesto de materiales. - (...) A solicitud del Ministerio Público, el juez podrá ordenar la prisión preventiva, si en la primera medida preventiva se acredita que se han acordado los siguientes presupuestos: a) existen elementos justificados y graves. una creencia que justifica una evaluación precisa de los delitos que implican al acusado como autor o participante. b) una pena de más de 4 años de prisión; c) un acusado que, sobre la base de sus antecedentes y otras circunstancias en el caso particular, puede concluirse razonablemente que ha intentado evadir el juicio (amenaza de evasión) u obstruir. investigación. verdades (riesgo de obstrucción).

Por tanto, el inciso a) de este artículo precisa o define la denominada prueba suficiente, que se refiere estrictamente a la conexión entre el imputado y la conducta delictiva. es una garantía práctica de la libertad personal; por ello, las órdenes de prisión se dictan únicamente cuando existen indicios razonables y serios de una creencia que razonablemente se pueda creer que está relacionada con la conducta delictiva en la que el imputado es o ha participado.

Para comprender la importancia crítica de los estándares probatorios en la investigación de los hechos en los sistemas de justicia penal sujetos al principio de libre valoración, es útil distinguir analíticamente dos elementos que componen la valoración de la prueba, a los que nos referimos como globales (Ferrer, 2007, pág. 41).

El primer punto, que se puede denominar como evaluación en sentido estricto, se refiere a la determinación de la justificación empírica que la prueba presentada proporciona a los supuestos fácticos del caso que se enfrenta en el proceso. Aceptando un concepto racional de autoevaluación, el problema en este punto es evaluar las relaciones de corroboración o refutación que se pueden establecer entre

los elementos de evaluación de la prueba disponible y las alegaciones de hecho del caso. Un sujeto de proceso basado en nuestro conocimiento científico disponible y generalizaciones empíricas bien establecidas o también llamadas pautas empíricas.

Es importante notar que estas relaciones confirmatorias, expresadas como inducciones probabilísticas, no prueban la verdad de la hipótesis, sino que sólo la confirman como una posible explicación de la existencia de la evidencia de evaluación, lo que en sí mismo no excluye la posibilidad de que puedan existir otras hipótesis. ser igualmente explicativo (Popper, 1973, p. 36).

Esto quiere decir que la evaluación de los hechos en el proceso se da en condiciones de incertidumbre, se hace énfasis en; una forma de incertidumbre, aunque a menudo característica del razonamiento inductivo y, por lo tanto, válida para probar hipótesis científicas o históricas, se amplifica en el ámbito de la evidencia legal, ya que la evidencia relevante puede no ser concluyente debido a la restricción de tiempo típica. la aplicación de los procedimientos así como las reglas sobre exclusión de prueba y la intervención de las partes en la producción y presentación de prueba, que el juez podrá conocer.

El resultado del momento que se pretende valorar en sentido estricto es que la individualización de la prueba confirma las afirmaciones sobre los hechos del caso a las que se adhieren las partes y la diferencia entre los factores que inciden en su mayor o menor peso probatorio (relacionados a la confiabilidad de la evidencia, hay dudas sobre el grado de evidencia o corrección, su naturaleza como evidencia directa o indirecta, la validez de las generalizaciones o la base empírica sobre la cual se extraen las conclusiones son debilidades probatorias.

En suma, la prueba suficiente va ligada al material probatorio, que se erige como uno de los elementos necesarios para la calificación de la prisión preventiva, la ausencia de esa cantidad probatoria cualitativa y cuantitativa determina la improcedencia de la medida cautelar.

A su vez el inciso b) se refiere a la prognosis de pena que no es más que la proyección que hace el juez bajo el supuesto de avizorar que la pena a imponerse al actor sea superior a 4 años, lo cual supone que para determinar tales medidas coercitivas, el juez realizará un análisis preliminar de la prueba disponible y, con

base en ella, pronosticará la posible sentencia para el imputado. Únicamente dicta órdenes de prisión preventiva cuando la pena potencial supera los cuatro años de prisión según el caso, en lugar de la pena impuesta por el delito en cuestión.

El denominado pronóstico de la pena permita identificar un nivel razonable de probabilidad de que la pena a imponer será superior a cuatro años de privación de libertad; en este caso se debe diferenciar el límite penológico como presupuesto material de la prisión preventiva, de la gravedad de la pena como criterio legal del juicio de peligrosismo procesal.

A manera de una toma de posición resulta correcto afirmar que la prognosis de la pena, no puede anclarse en que el delito, tenga como extremo mínimo un pena igual o superior a los cuatro años de pena privativa de libertad, sino que por el contrario, se debe valorar, las circunstancias personales, la forma y medios de perpetración del injusto penal como son las circunstancias atenuantes o agravantes así como la relación que el imputado tenga con la víctima, sino por el contrario hacer un diagnóstico de la posible sanción punitiva que pueda darse.

Y por último, pero no menos importante es el Peligro procesal que se erige como verdadero apoyo a la medida cautelar aplicada en los casos en que el demandado, en base a su experiencia y otras circunstancias del caso particular, puede razonablemente esperar que intentará evitar el proceso judicial desde dos frentes el peligro de fuga y la obstaculización de la averiguación de la verdad. En relación al peligro de fuga el Tribunal Constitucional, en la sentencia contenida en el expediente N° 0298-2003-HC/TC, ha enfatizado que: "La existencia o no del peligro procesal debe determinarse a partir del análisis de una serie de circunstancias que pueden tener lugar antes o durante el desarrollo del proceso y que están ligadas, fundamentalmente, a las actitudes y valores morales del procesado, su ocupación, sus bienes, sus vínculos familiares y cualquier otro factor que permita concluir, con un alto grado de objetividad, que la libertad del inculpado, previa a la determinación de su eventual responsabilidad, pone en serio riesgo el correcto desenvolvimiento de la labor de investigación y la eficacia del proceso".

La falta de estándares razonables para los acusados que interrumpieron la investigación judicial o eludieron el juicio, en última instancia, llevó a la prisión preventiva judicial o, en su caso, a la continuación de la prisión sin justificación razonable, lo cual es arbitrario.

Para hacer esto, los jueces deben sopesar estas suposiciones para determinar si el acusado puede ser juzgado, dadas las particularidades del caso. Llegados a este punto, cabe señalar finalmente que el riesgo de fuga no puede basarse en predicciones abstractas, ya que todos los imputados, si existen indicios de conducta delictiva, tendrán una clara intención de fuga, en caso contrario debe basarse en la realidad.

Los hechos sobre los datos de eventos particulares, la probabilidad es casi determinista. Según la doctrina, deben probarse las circunstancias esenciales de la predicción de fuga.

El criterio a considerar por los jueces para determinar el riesgo de fuga está relacionado con la filiación, que tiene tres dimensiones: 1) propiedad, 2) filiación familiar y 3) filiación laboral (Corte de Casación 631-2015, 2015). Cuando se dan estas circunstancias, impiden que el imputado se dé a la fuga. Otro criterio importante del riesgo de fuga está relacionado con el carácter del acusado, es decir, antecedentes penales limpios.

El castigo puede ser significativo, pero los medios físicos de coerción, a saber, la detención, no pueden aplicarse automáticamente en ausencia de un elemento penal de riesgo procesal.

Suponiendo que el riesgo de fuga exista únicamente por la condición de extranjero del imputado, esto equivaldría a una discriminación basada en la nacionalidad, más aún si existen las denominadas barreras a la emigración.

Con respecto a la "obstrucción de pruebas", se debe tener en cuenta la complejidad o la naturaleza del caso, especialmente cuando hay varios acusados involucrados y uno de los acusados tiene la intención de cooperar en la investigación de la verdad, p. credo, cooperación efectiva y pronta finalización del proceso.

Asimismo, si cierta información es absolutamente necesaria en relación con el delito que se investiga, deberá recabarse de las oficinas donde labora el imputado, a través de las cuales se cometió la actividad delictiva ilícita. Otro detalle a agregar son las múltiples imputaciones penales de actividad ilícita, cada una de las cuales complica la prueba para que en tal situación procesal el imputado pueda trabar la investigación.

3.2.2. La Presunción De Inocencia

La presunción de inocencia y el estado constitucional

La presunción de inocencia como principio el autor Castillo (2018), refiere que “la presunción de inocencia constituye una norma-principio de carácter pragmático que se dirige tanto al juez como al legislador y tiene alcance auténticamente preceptivo que es capaz de vincular tanto al legislador pasado como futuro” (p. 34).

En esa misma línea, siguiendo las ideas del citado autor, se tiene que el “efecto irradiante” la presunción de inocencia generalmente trasciende la estricta ley penal y el procedimiento penal para convertirse en un principio central del sistema legal, lo que lleva a la interconexión de las legislaturas, los jueces y el poder ejecutivo.

Ahora bien, resulta importante mencionar que “la presunción de inocencia como principio convencional y constitucional explícito despliega un efecto aplicativo directo e inmediato dentro del sistema penal y, en particular, en el subsistema penal en la configuración de las disposiciones jurídicas y las diversas decisiones estatales” (Castillo, 2018, p. 38).

Por lo tanto, las diferentes situaciones en los sistemas penales y las instituciones públicas se rigen por las pautas y limitaciones establecidas en los principios anteriores.

La presunción de inocencia como derecho fundamental, como afirma Bernal (2015) es un derecho subjetivo con carácter fundamental, por lo que se considera un derecho fundamental si se cumplen las siguientes condiciones:

Ha sido establecido por una disposición que a) pertenece al capítulo de derechos fundamentales de la constitución o b) pertenece, en general, al texto constitucional o c) al bloque de constitucionalidad; o d) cuando la norma o posición jurídica relativa al derecho ha sido reconocida como una norma o posición de derechos fundamentales por parte de la jurisprudencia, concluyendo en citado autor que para ser derecho fundamental, es una condición necesaria que el derecho subjetivo relevante satisfaga por lo menos una de las condiciones formales antes señaladas. (p. 14).

En base a lo referido por el citado autor, es claro que la presunción de inocencia cumple con todas las condiciones formales descritas líneas arriba, razón por la cual Castillo (2018), refiere que “la presunción de inocencia como derecho fundamental puede tener y de hecho posee distintas formulaciones como presunción de no culpabilidad, presunción de inculpabilidad, el reputar inocente o el presumir inocente” (p. 55).

El mismo autor Castillo (2018), indica que “la presunción de inocencia no solo constituye un principio estructural o garantía mínima del proceso penal, sino que constituye al mismo tiempo un derecho fundamental que puede exigirse y reclamarse tanto a nivel de justicia ordinaria como a nivel de justicia constitucional” (p. 49), dado que de acuerdo al cumplimiento del mismo depende el respeto del derecho de defensa, derechos a los recursos e imparcialidad judicial.

En cuanto a la naturaleza jurídica de la presunción de inocencia, el autor Nieva (2013) refiere que la naturaleza jurídica originaria de la presunción de inocencia fue la regla de la carga de la prueba; las etapas están claramente limitadas por el proceso judicial, especialmente en relación con la prueba.

En este sentido, para los citados autores, la presunción de inocencia y su designación jurídicamente incorrecta pero sociológicamente muy ilustrativa conducen a su carácter jurídico de “principio informativo del derecho penal” porque no se limitan. El respeto depende de aspectos tan importantes como: la imparcialidad del tribunal, las garantías contra condenas injustas sin orden judicial y el derecho de las personas a que su persona o sus bienes no sean afectados por una investigación arbitraria. En cuanto al papel de la presunción de inocencia, cabe señalar que no es sólo una “regla de conducta procesal” sino también una “regla de conducta extraprocesal” y su alcance va más allá del estrecho marco de la presunción de inocencia.

El proceso penal, que de este modo ampara determinadas situaciones en las que se formulan declaraciones o actos de fondo, en los que se declara culpable a una persona, se explicará en el apartado siguiente, aclarando que las “funciones fuera del procedimiento” se explicarán sólo de forma muy específica, porque el análisis más preciso se hará sobre la “función del programa” que está completamente relacionada con el tema de estudio.

Así se llega a la función extraprocesal, dado que se asiente que el efecto irradiante del principio de presunción de inocencia no solo alcanza a los poderes públicos, sino que también se extiende a todos los particulares miembros de la sociedad.

Castillo (2018) indica al respecto que “la dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia reclama que toda persona (varón o mujer, nacional o extranjero) tiene

el derecho a recibir el tratamiento de no autor o de no participe en los hechos de carácter delictivo, mientras no haya sentencia condenatoria firme” (p. 95)

Las referidas exigencias no solo son exigidas a los jueces y fiscales, sino tal como ya se hizo referencia ut supra, a todos los poderes públicos y particulares que forman parte de la sociedad.

Con relación a la función intraprocesal se precisa que consiste en la incidencia estrecha y limitada que tiene el principio de presunción de inocencia dentro del proceso penal y principalmente “en la configuración de las medidas cautelares del proceso penal, en especial, en la prisión provisional” (Castillo, 2018, p. 175).

Otra visión doctrinaria la aporta Villegas (2013), cuando reporta que en la vertiente procesal, el macroscópico derecho a la presunción de inocencia “para lograr su finalidad se divide en derechos más específicos que regulan cuatro ámbitos de aplicación distintos: como modelo de información para causas penales, (b) imputados en causas penales en general, (c) como reglas de prueba y (d) como marco legal. (p. 263)

La presunción de inocencia también es percibida como un principio informador del proceso penal porque se estima que “la presunción de inocencia actúa como el derrotero a seguir durante todo el proceso penal, reflejando el corte garantista de un ordenamiento jurídico de un Estado” (Villegas, 2013, p. 263).

Dicho de otro modo, “la presunción de inocencia actúa como directriz que marca el camino a seguir por el proceso penal” (Piva, 2018, p. 112).

A lo que se refieren los párrafos anteriores de este apartado, como el de Nieva (2013), es que: la presunción de inocencia es en efecto como un faro que guía la navegación de los barcos. La baliza se enciende periódicamente con intervalos cortos pero constantes. Sin embargo, el barco nunca se acercaría al faro porque terminaría su viaje encallado. Pero nunca dejó de mirar la baliza y prestarle atención. (pág. 76)

Nieva (2013) explica que la presunción de inocencia se implementa en las causas penales, especialmente en el contexto de la obtención de pruebas y testimonios de los imputados, como guía y/o instrucción de diversas actuaciones, y debe ser tratada con moderación, teniendo en cuenta que si es excesivo, no lo será. Habrá

cualquier acción y/o proceso de investigación, pero no cabe duda que la presunción de inocencia siempre existe en cualquier acción como garantía.

La teoría de la regla de tratamiento del imputado durante el proceso de la presunción de inocencia refiere que “impone la obligación de tratar al imputado como si fuese inocente, por tal motivo impide la aplicación de medidas judiciales que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable y, por lo tanto, cualquier tipo de resolución judicial que suponga una anticipación de la pena” (Villegas, 2013, p. 264).

Castillo (2018) indica que la privación de libertad en régimen de detención temporal en procesos penales debe ser considerada únicamente como una opción remanente de proporciones extremas, mientras que la aplicación de otras medidas menos gravosas es inútil e ineficaz para lograr los fines del proceso penal.

Piva (2018) afirmó que la presunción de inocencia en el derecho penal moderno impone los siguientes requisitos de las disposiciones sobre el tratamiento del imputado en el proceso penal: 1. Sólo se tomarán precauciones cuando se garantice el presupuesto reglamentario. 2. El objeto de estas medidas es estrictamente preventivo y en modo alguno represivo, sino una fase preventiva o de investigación. (p. 116)

La teoría de la presunción de inocencia como regla probatoria o regla de valoración de la prueba sostenida por Villegas (2013), indica que “en esta vertiente la presunción de inocencia se manifiesta en las siguientes consecuencias: a) La concurrencia de pruebas de cargo suficiente; y b) La prueba debe haber sido admitida y actuada con el debido respecto a los derechos fundamentales” (p. 270). Aquí cabe resaltar que la concurrencia de pruebas de cargo suficiente guarda relación directa con las declaraciones de los colaboradores eficaces. En tal sentido, dicha consecuencia señala que “no basta con la existencia de una mínima actividad probatoria, sino que tal prueba debe de ser de cargo, esto es, debe tener imprescindiblemente un contenido objetivamente incriminatorio para el acusado o acusados, dado que no es suficiente la con simple presencia formal de pruebas” (Villegas, 2013, p. 266).

Piva (2018), indica que “para desvirtuar la presunción de inocencia es necesario que exista una mínima actividad probatoria, que pueda entenderse de cargo y que

haya sido obtenida respetando todas las garantías constitucionales y legales” (p. 117).

Nieva (2013), indica que “la presunción de inocencia constituye una restricción a la libre valoración, porque no permite al juez condenar albergando dudas razonables” (p. 70), en otras palabras, si no existiera la presunción de inocencia, los jueces evaluarían la evidencia de manera arbitraria, realmente liberal e incluso en algunos casos.

En cuanto al efecto de la cooperación efectiva sobre la presunción de inocencia, se afectan tres manifestaciones del principio y/o derecho de la presunción de inocencia: muchas veces se cuestiona el hecho.

Fernández (2017) que cuestiona los hechos que si la declaración de un colaborador por sí sola puede sustentar una decisión judicial o pueda constituir prueba suficiente. Finalmente, en cuanto a su manifestación como regla de tratamiento del investigado en el proceso penal, se cuestiona el hecho “que se adopten decisiones interlocutorias basadas exclusivamente en la declaración de un colaborador obtenida sin o con contradicción, esto es, como mero acto de investigación o como acto de prueba no sometido a corroboración” (Fernández, 2017, p. 7), conforme las exigencias del artículo 158° inciso 2 del Código Procesal Penal.

El problema de la prisión preventiva y presunción de inocencia abordada según la corriente abolicionista de la prisión preventiva tiene como principal representante Ferrajoli (1995), quien es uno de los filósofos del derecho con mayor trayectoria quien como idea preliminar sobre el dilema tratado señala que “la historia de la prisión cautelar del imputado en espera de juicio está estrechamente vinculada a la presunción de inocencia, en el sentido de que los límites dentro de los que la primera ha sido admitida y practicada en cada ocasión sirven de cerca los avatares teóricos y normativos de la segunda” (p. 551).

De lo referido por Ferrajoli, en el sentido que la prisión preventiva está estrechamente vinculada con la presunción de inocencia, Manzini, citado por (Ferrajoli, 1995), señala que “si un ciudadano presunto inocente es encarcelado por necesidades procesales, ningún juego de palabras puede impedir que lo sea también por necesidades penales, señalando seguidamente, que en dicho

supuesto ¿de qué inocencia se trata?, ¿por qué no se aplica el principio de presunción de inocencia con todas sus lógicas consecuencias?, ¿por qué no se abole la prisión provisional? (p. 555)

Esta posición de Manzini es respaldada plenamente por (Ferrajoli, 1995), en tanto señala que si verdaderamente no se quiere reducir la presunción de inocencia a puro oropel inútil, debe aceptarse la abolición de la prisión provisional, dado que dicho instituto es abusivo e ilegítimo, que únicamente conlleva al desvanecimiento de todas las demás garantías penales y procesales.

Carbonell (2006) respaldando también la posición adoptada por Manzini y Ferrajoli, pero no desde una perspectiva abolicionista sino moderadamente garantista, señala que “se debería limitar a la prisión preventiva desde el propio texto constitucional, dado que vulnera la presunción de inocencia y supone un sacrificio desproporcionado de la libertad de un individuo que no ha sido declarado culpable de nada” (p. 6).

Ferrajoli (1995) también señala que, “solo la doctrina más avisada reconoce la manifiesta incompatibilidad entre el principio de presunción de inocencia (o incluso sólo de no culpabilidad) y la prisión sin juicio” (p. 556), entendiéndose que por doctrina avisada, Ferrajoli se refiere a algunos de los más destacados teóricos de la modernidad, tales como Hobbes, Voltaire, Betham, Diderot, Condorcet y Beccaria, quienes “sostuvieron que la prisión sólo se justifica después de haber probado en un juicio justo que el acusado ha cometido el delito por el que se le imputa” (Moreso, 2017, p. 2).

Para el autor reportado “desde una concepción cognoscitivista y acusatoria del proceso, la prisión provisional no solo no es necesaria sino que resulta perjudicial para la averiguación de la verdad por el cauce del juicio contradictorio” (Moreso, 2017, p. 558).

En base a todas las ideas referidas en los párrafos ut supra del presente apartado, Ferrajoli (1995), concluye señalando su postura respecto a un proceso penal sin prisión provisional, al menos hasta la conclusión del juicio de primera instancia, para lo cual da los siguientes fundamentos: El imputado debe comparecer libre ante sus jueces, no sólo porque así se asegura la dignidad del ciudadano presunto inocente, sino también, sobre todo por necesidades procesales; es decir, para que quede situado en pie de igualdad con la acusación; para que después del interrogatorio y

antes del juicio pueda organizar eficazmente sus defensas; para que el acusador no pueda hacer trampas, construyendo acusaciones y manipulando las pruebas a sus espaldas. (p. 559).

La supresión de la prisión preventiva eliminaría el miedo y rehabilitaría las funciones cognitivas en cuanto a las potestades de la jurisdicción, resolviendo la crisis y/o problema de legitimación del poder judicial y restituiría a los jueces su papel de garantes de los derechos fundamentales de los ciudadanos, los cuales en la actualidad se encuentran totalmente desatendidos. (p. 560).

No obstante, la postura radical y extremadamente garantista planteada por Ferrajoli, dicho autor reconoce que, en el caso de delitos graves, existe el peligro que el imputado altere las pruebas; sin embargo, justifica aquello señalando que ningún valor o principio puede satisfacerse sin costes, siendo que el sistema penal precisamente debe estar dispuesto a pagar dicho coste (riesgo), si quiere salvaguardar su razón de ser. Como partidario de esta corriente abolicionista o de desprisionalización también se tiene a (Binder, s.f.), quien señala que “la prisión preventiva es la institución maldita del derecho procesal, en tanto quien manifieste que se trata de un mero instrumento de cautela, cierra los ojos frente a la más clara de las realidades” (p. 1).

Para el autor refiere que existen cinco modelos teóricos de aproximación al problema de la prisión preventiva, siendo que el quinto de ellos reconoce que la prisión preventiva no constituye una herramienta de base constitucional, en tanto, no hay lugar para una doctrina constitucional de la prisión preventiva.

Una corriente de contraposición es la compatibilizadora que busca según Llobet (2016) “una interpretación histórica confirma la compatibilidad entre la presunción de inocencia y la prisión preventiva, y a su vez la incidencia de la primera sobre la segunda” (p. 135).

Llobet (2016) indica también que “las diversas convenciones sobre Derechos Humanos y principios sobre la Administración de Justicia aprobados internacionalmente, en los que prevé la presunción de inocencia, se permite también la privación de libertad del imputado durante el proceso” (p. 136).

En ese sentido, cabe señalar que lo señalado por Llobet Rodríguez es totalmente cierto, por cuanto prueba de ello se tiene por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos, la misma que reconoce tanto la presunción de inocencia como

la prisión preventiva, conforme se pasará a citar: Artículo 7, inciso 5: Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. Artículo 8, inciso 2: Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.

Gálvez (2017) en esa misma línea pero partiendo de lo señalado por el Tribunal Constitucional en sus diversas sentencias respecto a que los derechos fundamentales no son absolutos, sino que admiten injerencias legítimas, indica que “la libertad personal admite injerencia y la presunción de inocencia se relativiza para conseguir fines constitucionalmente válidos o positivos, sin que ello constituya una contradicción o una incompatibilidad entre los derechos y las normas sobre derechos humanos” (p. 368).

Castillo (2018), precisa que “la presunción de inocencia puede ceder a nivel del proceso penal y en concreto en la configuración y aplicación de las medidas cautelares siempre que se pretenda alcanzar un fin constitucional legítimo” (p. 212). A nivel constitucional cabe indicar que la carta magna, en el artículo 139, reconoce las garantías de la administración de justicia, las cuales deben ser observadas y respetadas a lo largo de todo proceso judicial, acorde con los principios de un debido proceso. Del mismo modo, nuestra carta magna contempla derechos fundamentales que asisten a todo ciudadano sometido a un proceso penal, como la presunción de inocencia, que constituye una garantía genérica —aquellas normas generales que guían el desenvolvimiento de la actividad procesal (San Martín, 2003, p. 81).

La presunción de inocencia es considerada también un derecho porque es un atributo inherente de la persona sometida a un proceso; asimismo, es una garantía porque contiene mecanismos destinados al reconocimiento y la vigencia de ese derecho o atributo. Se considera, igualmente, un principio, porque sirve de guía para salvaguardar y garantizar los derechos de los individuos sometidos a un proceso (Felices, 2021, p. 6).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha determinado que el derecho a la presunción de inocencia es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme. Este derecho implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa (CIDH, 2004, párr. 154).

Maier (2016), respecto de la presunción de inocencia, afirma que la ley fundamental impide que se trate como si fuera culpable a la persona a quien se le atribuye un hecho punible, cualquiera que sea el grado de verosimilitud de la imputación, hasta tanto el Estado, por intermedio de los órganos judiciales establecidos para exteriorizar su voluntad en esta materia, no pronuncie la sentencia penal firme que declare su culpabilidad y la someta a una pena (p. 490). La presunción de inocencia es una de las banderas de lucha de la reforma liberal al sistema inquisitivo (Maier, 2016, p. 491)

3.2.3. La colaboración eficaz

En la doctrina se plantean diversas definiciones respecto a la colaboración eficaz o dígase proceso por colaboración eficaz, tal como lo denomina el Código Procesal Penal del 2004; sin embargo, todas aquellas definiciones coinciden en señalar sus principales características.

Castillo (2018), define a la colaboración eficaz como: un trato y un negocio jurídico que el Estado realiza, a través de sus funcionarios (fiscales), con los criminales a fin de que a cambio de información pertinente y útil sobre la intervención de terceros en la comisión de hechos punibles los delatores logren obtener ciertos beneficios, tales como, la exención de la pena, pena atenuada o determinadas condiciones de ejecución de la pena". (p. 313).

De igual forma, San Martín (2015) define el proceso de cooperación efectiva como: un mecanismo negociado de justicia penal basado en la imagen del penitente, quien debe admitir o por lo menos no puede refutar previamente la atribución de actividad delictiva a su autoridad y proveer suficiente, información válida y relevante para erradicar actividades delictivas, identificar la lógica delictiva de las organizaciones criminales y sus integrantes y/o suministrar fondos delictivos o determinar su destino o ubicación (871. lpp.). Para brindar una definición más amplia o más

completa del proceso de cooperación efectiva, lo defino como un proceso específico en el que el estado, representado por sus fiscales, celebra un acuerdo de culpabilidad con el acusado (autor o partícipe) o condenado. caso de delincuencia organizada, blanqueo de capitales o delitos de corrupción oficial en el sentido de que proporcionen información pertinente, suficiente y válida para evitar la continuación o consumación de uno o más delitos, para comprender la planificación y ejecución, para identificar a los autores o partícipes. , transfiere instrumentos, bienes y ganancias ilícitas a cambio de diversas recompensas e intereses, tales como: exención, reducción, suspensión de la ejecución o exención de la pena que la ejecuta.

Ciertamente es cierto que la naturaleza jurídica de la cooperación efectiva ha sido un debate continuo dentro de la doctrina, y mientras hay autores que la mencionan como un proceso verdaderamente especial, hay autores que, por el contrario, cuestionan que se trate de un simple proceso administrativo. procedimiento. . En este sentido, con respecto a la primera posición -el proceso verdaderamente especial- se señala que “es un proceso especial que se diferencia del proceso habitual que está en el llamado mecanismo de recompensa” (Sánchez, 2011, p. Veinte -cuatro). Por el contrario, existe otra posición –procedimiento administrativo simple– que establece que “es un procedimiento, o si se quiere, una revisión de documentos, pero no una causa penal propiamente dicha” (Cuesta, 2018, p. 228). Asencio (2018) planteó que para constituir una verdadera causa penal especial, debe reunir las siguientes características básicas o fundamentales, tales como: jurisdicción, conflicto, dualidad de partes y derecho a la defensa, entre las que se encuentra la falta de eficacia. cooperación básica. . , que es un programa simple o un archivo administrativo.

Sánchez Velarde señala que la naturaleza jurídica del Instituto para la Cooperación Efectiva es “un proceso especial que se diferencia del proceso normal”, lo que no crea ninguna ambigüedad ni error, sino que simplemente indica la naturaleza jurídica del error que cometió la Instrucción Penal de 2004.

Un procedimiento de código que se aplica a la colaboración eficaz. La cooperación efectiva se basa en criterios puramente utilitarios para encontrar herramientas efectivas para combatir el fenómeno del crimen organizado que existe en todas las

sociedades, mientras que los mecanismos tradicionales compatibles con las garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos son completamente inadecuados e ineficaces. luchar contra esta nueva forma de delincuencia.

Dada la necesidad de herramientas efectivas para combatir el crimen organizado, una imagen de cooperación efectiva o un denunciante premiado que gane apoyo y popularidad en la comunidad, según la lógica planteada por Jeremy Bentham, "la convicción es más importante que ambos deseables". más cómplices. que todo" (Castillo 2018).

Castillo (2018) señala que la cooperación efectiva se basa en que el delito político requiere el uso de una gama adecuada de herramientas de investigación y herramientas para combatir el crimen organizado y otros delitos graves (narcotráfico, narcotráfico, terrorismo, lavado de activos y sabotaje). desde adentro, ofreciendo beneficios y un trato más indulgente a aquellos participantes que informan veraz y adecuadamente lo sucedido e intervienen en su comportamiento. (p. 340).

De igual forma, la doctrina argentina señala que "los imputados o cómplices son esencialmente instrumentos de política criminal para combatir el fenómeno del crimen organizado, es decir, se necesitan instrumentos jurídicos efectivos para investigar delitos complejos" (Terranova, 2016, p. 16).

Sin embargo, cabe señalar que el sistema de cooperación efectiva nació como una medida extraordinaria, pero con el paso de los años esta medida especial demostró su relevancia procesal.

La finalidad de la colaboración eficaz se suele confundir que lo que busca esencialmente la institución jurídica de la colaboración eficaz es un elemento subjetivo; es decir, la admisión de culpabilidad y el arrepentimiento por parte del colaborador de haber cometido un determinado delito; sin embargo, debe quedar claro que lo que realmente importa al ordenamiento jurídico de esta institución jurídica "excepcional", es "la entrega de información útil y valiosa a fin de esclarecer un delito, identificar a sus intervinientes (autores y partícipes) y acopiar evidencias incriminatorias que afiance la persecución penal" (Castillo, 2018, p. 324).

Es en razón a ello, que el artículo 475 inciso 1 del Código Procesal Penal, establece expresamente que la información que proporcione el colaborador debe permitir, alternativa o acumulativamente: “evitar la continuidad, la permanencia y/o consumación de un (s) delito (s), tener conocimiento de las circunstancias en las que se planifico y ejecuto, la identificación de los autores y/o partícipes y entregar los instrumentos, efectos, ganancias y los bienes delictivos relacionados con las actividades de la organización criminal” (p. 618).

Asencio (2018), refiere que el proceso por colaboración eficaz, bajo la excusa de la denominada corroboración, extiende sus actos a investigaciones amplias, “con la finalidad de perseguir eficazmente la delincuencia organizada” (Cuesta, 2018, p. 204).

Respecto al ámbito de aplicación resulta correcto afirmar que la institución jurídica procesal de la colaboración eficaz tiene su fundamento en ser una medida netamente excepcional, debe quedar claro “que no todo delito puede ser objeto de este proceso especial” (San Martín, 2015, p. 872).

En ese sentido, “la cobertura y el ámbito de aplicación de la colaboración eficaz depende de una decisión político criminal y de la particular concepción que tenga del instituto cada legislador nacional” (Castillo, 2018, p. 380).

Esta doctrina establece dos posiciones en cuanto al alcance del ordenamiento jurídico para los procedimientos de cooperación efectiva, la primera es que el ordenamiento debe abarcar todos los delitos del Código Penal sin excepción; mientras que la segunda significa que se trata de una excepción inequívoca, cuya aplicación debe limitarse a determinados delitos en función de la gravedad del delito y la variedad de personas involucradas en su comisión.

Considerando la situación mencionada en el párrafo anterior, “la legislación peruana no opta por un estándar estricto o amplio, sino por una visión de compromiso” (Castillo, 2018, p. 382), de la clara redacción se desprende que el artículo. 474 CPP artículo 2, que establece que los delitos que pueden ser objeto del contrato pueden ser asociaciones ilícitas, terrorismo, blanqueo de capitales, delitos informáticos, delitos de lesa humanidad, trata de personas, homicidio, delitos de lesa humanidad en la administración pública (conmoción cerebral, peculado, corrupción oficial), delitos fiscales, delitos aduaneros (si se cometen conjuntamente por varias personas), todos los casos de delincuencia organizada y delitos de

conformidad con los artículos 382 a 401 del Código Penal y la Ley 30424 (si el colaborador es una persona jurídica).

El proceso de colaboración eficaz se desarrolla en base a determinados principios, los mismos que atendiendo al carácter especial de este “proceso”, entre los cuales se encuentran los siguientes:

El principio de eficacia, es de advertir que Este principio determina los lineamientos del artículo 475 inciso 1, artículo 1 de la Ley de Procedimiento Penal, porque la información o prueba aportada por un cómplice válido debe ser útil y significativa para evitar la continuación, duración o consumación del delito, conociendo las circunstancias de búsqueda de delincuentes y participantes, herramientas, transferencia de propiedad, ganancias y activos delictivos relacionados con las actividades de las organizaciones criminales.

El principio de proporcionalidad que rige el artículo 475 del código procesal penal en el sentido de que los beneficios de incentivo a obtener por los colaboradores designados se basarán o estarán relacionados con la validez. y la importancia de la cooperación, siempre que la persona que cumple la pena pueda ser indultada, sustituida por otra, destituida de su cargo o sustituida por una pena (inciso 2). Considerando que la inmunidad y la reducción de pena son los beneficios más apetecidos o apetecidos por los colaboradores, dada su naturaleza, el Código Procesal Penal establece que “la cooperación debe ser positiva y la información puede evitar delitos de especial connotación y gravedad, que son claramente investigados en términos de identificación y contribuir a la aprehensión de los líderes de organizaciones criminales particularmente importantes y, en última instancia, a revelar aspectos importantes de sus fuentes de financiamiento y suministro”, si esas proporciones son iguales.

El principio de proporcionalidad también se refleja en el artículo 6 del Código Procesal Penal, pues establece claramente que para consensuar los intereses del líder, jefe ejecutivo o jefe ejecutivo de una organización criminal, el fiscal debe sopesar el grado de criminalidad de la organización criminal. el aporte de los asociados versus su aporte a la estructura delictiva y la relación entre niveles de participación en el delito.

De igual forma, los principios expuestos en los comentarios también se encuentran en las instrucciones del artículo 478 del Código Procesal Penal, ya que su artículo 5 establece claramente que “para apreciar la proporcionalidad de los beneficios otorgados, el juez deberá tener en cuenta la posibilidad de información”, cuya lógica es brindar información positiva y eficaz para evitar la consumación del delito, difiere del conocimiento de la planificación y ejecución del delito, pues ambos tienen una finalidad superior. el principio de proporcionalidad también se considera como una directriz en el artículo 479 inciso 3, que establece que la responsabilidad se basará en la información proporcionada por los socios comerciales existentes cantidad de información.

Principio de condicionalidad que supone beneficios de facilitación: la mitigación del castigo, la libertad condicional o la mitigación de una persona que cumple una condena está condicionada a que el solicitante acepte o, en cualquier caso, no contradiga todos o al menos parte de los cargos (Artículo 472, inciso 4), la cooperación de los colaboradores que brindan sea una información válida, dicha información está válidamente fundamentada, “la no reincidencia en el delito dentro de los diez años de otorgado el beneficio, la imposición de obligaciones, concurrencia al proceso materia de la causa y caución en el caso de obligaciones” (San Martín, 2015, p. 874).

Principio de formalidad procesal, que según los autores Cáceres y Aguirre (2017) hace referencia a que “la iniciación de este procedimiento [sic] exige una manifestación expresa del imputado, quien debe hacer mención que desea acogerse a sus términos”. (p. 1190).

Según Sánchez (2011), la forma procesal depende de las reglas procesales, incluido el fondo de reserva, que debe ser objeto de control judicial, para que las autoridades judiciales puedan verificar la legalidad de los contratos entre los aspirantes a válidos colaboradores y los representantes de los ministerios públicos.

Principio de oportunidad, es uno de los principios que está estrechamente relacionado con el principio de proporcionalidad, ya que la posibilidad de brindar información al público es un criterio importante e ineludible para medir la proporcionalidad del beneficio obtenido (Código Procesal Penal, artículo 478, numeral 5), por cuánto “si ella se aporta tardíamente o ya se conoce a través de otros medios de investigación, no produce beneficio alguno” (Sánchez, 2011, p. 24).

Principio de comprobación, es uno de los más importante en el proceso de cooperación eficaz es que el candidato como socio de cooperación pueda establecerse como un socio de cooperación efectivo en el sentido estricto, es decir, el juez penal aprueba el acuerdo de cooperación con un castigo efectivo. la información aportada deberá ser remitida para investigación y acción afirmativa por parte de fiscales y policías especializados”. (Sánchez, 2011, p. 24-25).

Principio de revocabilidad, Esto se refiere a que los beneficiarios están sujetos a ciertas condiciones y obligaciones en el proceso de cooperación efectiva (artículo 479 del Código Penal, artículo 480 del Código Judicial).

En cuanto a las etapas del proceso de cooperación efectiva, el Decreto Supremo No. 007-2017-JUS El artículo 3 establece seis (6) etapas del proceso de cooperación efectiva, ya que se requiere la creación de archivos y documentación tributaria. su propio ordenamiento jurídico “constituido por una serie de actos jurídicos que prueban que el proceso judicial está completo” (Sanmartina, 2015, p. 1 875).

La primera etapa es la etapa de cumplimiento, donde se inicia el proceso de cooperación efectiva, mientras que aquí se recibe una solicitud escrita u oral que cumple con ciertos requisitos básicos, tales como: la expresión voluntaria, el alcance de la sentencia, los hechos involucrados y la información proporcionada. en el mismo (Artículo 5 - Decreto Supremo N° 007-2017-JUS).

Asimismo, la Policía del Estado, previa acreditación de que el Ministerio Público está facultado para promover una cooperación eficaz, contrata a una persona que pueda acogerse al citado procedimiento y a otros funcionarios o empleados, si éstos, en el ejercicio de sus funciones, saber cómo hacer arreglos para que una persona se someta al procedimiento antes mencionado, para lo cual debe hacerse de manera inmediata y confidencial. Notificar al Ministerio Público (Artículo 6 - Decreto Supremo N° 007-2017-JUS).

También en esta etapa, los fiscales califican la solicitud -tanto escrita como oral- para comprobar si cumple con el artículo 474 del Código Procesal Penal. 7 — Decreto Supremo núm. 007-2017-JUS - y si la información es útil, pertinente,

suficiente, pertinente y comprobable para nombrar al solicitante como socio comercial válido y asignarle una contraseña (Artículo 8 - Decreto Supremo N° 007-julio de 2017).

La segunda fase es la fase de verificación, que según Castillo (2018) constituye la etapa principal en el proceso de cooperación efectiva bajo el claro mandato de la ley, y la validez de la verificación aquí será la verificación o determinación de la información facilitada, si se trata de información realmente imprescindible, suficiente, imprescindible, útil y comprobable, es decir, si no se cumplen estos requisitos, no será posible llegar a un acuerdo de cooperación efectiva y, por tanto, se dificultará el éxito del proceso descrito anteriormente.

Al respecto, los fiscales y colaboradores intervienen en esta etapa, pues en los casos en que el caso lo requiera, se contará con el apoyo de la Policía Estatal, la cual estará a cargo de las reservas de los procedimientos especiales (Artículo 13 del Decreto Supremo Nro. 007 - 2017 - JUS). En esta etapa, la creación de un caso de cooperación efectiva que contenga todo el Decreto Supremo N. 007-2017-JUS, el contenido señalado en el artículo 14, por especial confidencialidad, solo el fiscal, colaboradores y sus defensores, y en tiempo determinado. parte lesionada. Cabe señalar claramente que los procedimientos afirmativos están reservados y si en su contra se solicitan medidas restrictivas, serán proporcionalmente evaluadas por el juez competente (artículo 16 del Decreto Supremo N° 007-2017-JUS), quien debe ser responsable de la se mantiene en reserva la identidad de los colaboradores (Párrafo 3 del Artículo 17, Decreto Supremo N° 007-2017-JUS).

Para darle mayor dinamismo y que el proceso no se complique innecesariamente, se podrán realizar varias reuniones, también informales, entre el fiscal y los colaboradores, en las que podrá participar el colaborador con su abogado defensor (Administración Penal Art. 2. Ley, artículo 19) Decreto de la Corte Suprema No. 007-2017-JUS).

Finalmente, en esta etapa, el fiscal y los colaboradores pueden firmar un preacuerdo que indique el entendimiento mutuo y el cumplimiento de la totalidad o la mayor parte del Decreto Supremo n. 007-2017-JUS a las condiciones previstas en el artículo 20. Una tercera fase es la de celebración del acuerdo, en la cual, las diligencias de corroboración previamente realizadas, decidirá si desestima la

concesión de beneficios o si considera procedente el acuerdo de colaboración eficaz.

En el supuesto que desestime la concesión de beneficios, necesariamente se deberá emitir una disposición debidamente motivada, justificando cuál es la causal de denegación, ya sea que la información no resulte útil, relevante, suficiente y pertinente, falta de corroboración o falsedad en la información.

La consecuencia que acarrea, es que se inicia los cargos contra los sindicatos con la finalidad de procesarlos y perseguirlos (Artículo 25 del Decreto Supremo N° 007-2017-JUS).

Por el contrario, en el supuesto que se considere procedente el acuerdo de colaboración eficaz, se procederá a negociar con el colaborador y su defensor los alcances del mismo (Artículo 22 del Decreto Supremo N° 007-2017-JUS), para lo cual el fiscal hará un análisis de proporcionalidad donde tendrá en cuenta como criterios, la importancia de la colaboración, la magnitud del delito y la culpabilidad del colaborador (Artículo 23 del Decreto Supremo N° 007-2017-JUS).

La cuarta etapa es el acuerdo de intereses y cooperación efectiva, que puede verificarse simplemente determinando la idoneidad de un acuerdo de cooperación efectiva; del mismo modo para determinar el exceso de la conversación, si ocurre lo primero.

La citada fase es la contraria, con la firma de un contrato de interés y un acto de cooperación efectivo de manera concreta, involucrando al fiscal, asociados y sus defensores, quienes deberán cumplir con todos los requisitos o exigencias del artículo 27. Decreto de la Corte Suprema No. 007-2017-JUS. El quinto paso se refiere a la decisión de control y jurisdicción, que se produce cuando el control judicial de legalidad lo realiza un juez de instrucción que tiene derecho a conocer el acuerdo de interés y cooperación desde el momento de su emisión. Redactando la preparación de la declaración y continuando la investigación hasta que se dicte auto de persecución penal, incluidos aquellos por los que se ejecute al condenado, para tal efecto el fiscal del estado presentará un documento válido de cooperación tributaria (artículo 29 del Decreto Supremo No. 007-2017-JUS).

El control de legalidad del censor incluye principalmente la parte de contenido e interés de los registros

Proporciona a los socios efectivos el conocimiento de los alcances de los procedimientos especiales y el cumplimiento del artículo 474 del código procesal penal. Por lo tanto, si el juez encuentra durante el juicio que hay defectos en el acuerdo que pueden ser subsanados, los remitirá a las partes para su revisión, a fin de que lleguen a un acuerdo para combinar el acuerdo de intereses con la cooperación efectiva según el artículo 32 del Decreto Supremo N 007-2017-JUS, de no aprobarse el convenio, dictará auto justificando su decisión, y si se aprueba el convenio, dictará una “Sentencia de Colaboración Eficaz” que incluirá las mismas cláusulas descritas en el Interés y Leyes de Cooperación Efectiva (Decreto Supremo N° 007-2017-JUS, artículo 34).

La sexta etapa es la de revocación, que es la etapa final, que corresponde al fiscal verificar si se respetan las obligaciones contraídas en la sentencia sobre cooperación efectiva; es decir, si el colaborador eficaz no cumple. Además de otros deberes, el fiscal debe recabar los elementos de la sentencia que la sustenten para solicitar la cancelación de beneficios (Decreto Supremo N° 007-2017-JUS, artículos 36 y 37, inciso 1).

Una vez de solicitada la revocatoria de los beneficios por parte de fiscalía, el juez correrá traslado de la solicitud por el plazo de 05 días, siendo que con su contestación o sin ella, realizará la “audiencia de revocación de beneficios” con la asistencia obligatoria del fiscal (artículo. 480° inciso 1 del Código Procesal Penal). En ese sentido, cuando la revocatoria se refiere a la exención de la pena deberá seguirse lo establecido en el artículo. 480° inciso 2, cuando se refiere a la disminución de la pena deberá seguirse lo establecido en el artículo 480 inciso 3, y así sucesivamente para el caso de la remisión (artículo. 480° inciso 4) y suspensión de la pena (artículo. 480° inciso 5).

Otro aspecto relacionado con la colaboración efectiva es la diferencia entre colaboradores esperanzados y efectivos. Para explicar la diferencia entre un potencial colaborador y un colaborador efectivo, es necesario referirse a las seis fases del desglose del proceso de colaboración efectiva según el Decreto Supremo n. 007-2017-JUS, que es igual al desarrollado anteriormente.

En ese sentido, es precisamente en la quinta etapa -control y decisiones jurisdiccionales- donde existen las propias barreras para distinguir a los eventuales

colaboradores de los colaboradores efectivos, pues en esta etapa, antes de que se dicte el "juicio de colaboración", según Holdings. simple solicitante o colaborador, pero luego de dictar la "sentencia de cooperación efectiva", el juez competente aprueba el contrato en las mismas condiciones que se describen en la Ley "Sobre Interés y Cooperación Efectiva" (Artículo 34, Decreto Supremo N° 007-2017-JUS, inciso 2), desde las condiciones del solicitante hasta las condiciones de los propios socios cooperantes efectivos.

Alcántara (2018) informa que los cooperadores esperanzados proporcionados por decisiones judiciales (sentencias relativas a la cooperación efectiva) serán considerados cooperadores verdaderamente efectivos si la información brindada es razonable y promueve una mayor aclaración. comportamiento criminal.

Así, una de las principales diferencias entre los aspirantes a colaborador y los colaboradores eficaces es el valor probatorio asignado a sus propios enunciados, siempre que los enunciados de los cooperadores contengan una evaluación apreciativa del comportamiento diferente de la del cooperador dispuesto.

La cooperación ha demostrado ser más confiable y tener mayor valor probatorio en las medidas coercitivas y sentencias que las declaraciones realizadas; por supuesto, no se desconoce la confirmación externa a que se refiere el inciso 2 del artículo 158 del código procesal penal, no se restringirá ningún derecho sin confirmación externa, porque las declaraciones de los colaboradores por sí solas carecen de valor probatorio.

Lo anterior se fundamenta en que a los colaboradores condenados se les ha practicado no sólo auditorías fiscales confirmatorias, sino también jurisdiccionales sobre la legalidad y proporcionalidad del contrato.

Por el contrario, el potencial colaborador aún no está sujeto a revisión judicial para verificar la legalidad y proporcionalidad de su acuerdo con los fiscales, y existe incertidumbre sobre la aplicabilidad de su declaración, ya que existe la posibilidad de que el juez penal competente discrepe. el acuerdo, o peor aún, fue rechazado por el fiscal, por lo que las diversas declaraciones de los colaboradores fueron consideradas inexistentes (Código Procesal Penal, artículo 481, inciso 1), y por ello la posición del colaborador se tendrá por nula de pleno derecho y/o nula de pleno derecho una declaración del aspirante a colaborador eficaz que requiera o prescriba medios coercitivos de carácter personal, tales como las formas más extremas de

prisión preventiva. Como partidario de dicha posición radical y garantista, se tiene a Nakazaki (2015), quien señala que “las declaraciones de los solicitantes a colaborador eficaz no deben ser utilizadas como pruebas para sostener un requerimiento de prisión preventiva (como erradamente lo hace Fiscalía) y menos una condena, (...) siendo que las declaraciones de postulantes a colaborador eficaz sirven simplemente para abrir procesos penales, pero necesitan de otras pruebas adicionales para una prisión preventiva o sentencia condenatoria”.

Alcántara (2018), indica que “la declaración de un aspirante a colaborador eficaz no puede servir de fundamento para el sustento de alguna medida limitativa y restrictiva de derechos de los involucrados por esa incriminación” (p. 119).

En ese orden, contrariamente a Nakazaki y Alcántara, no cabe duda de que las declaraciones de los investigados sobre co-colaboradores válidos pueden ser utilizadas para buscar medidas coercitivas personales, tales como medidas cautelares según el artículo 481 a del Código Procesal Penal), pero se cree que deben cumplirse dos condiciones necesarias para que sea eficaz para tales fines. Primero, el endoso es más confiable que las afirmaciones de los propios contribuyentes válidos. En segundo lugar, se completó la conclusión del acuerdo de la tercera etapa y el fiscal cree que se ha aplicado un acuerdo de cooperación efectivo, lo que reduce las incertidumbres sobre la aplicación posterior de la delación o proceso eficaz.

III. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Área de estudio : Dimensión Praxiológica

Nivel epistemológico : Valoración.

Tipo de Investigación : Investigación Aplicativa – Jurídico Social

3.2. VARIABLES

Variable independiente:

Valoración de la colaboración eficaz en la prisión preventiva

Variable dependiente:

Afectación del principio de presunción de inocencia.

Tabla 01: Operacionalización de variables

VARIABLE	DIMENSIONES	INDICADORES	ESCALA DE MEDICION
Valoración de la colaboración eficaz en la prisión preventiva	Nivel constitucional	Fundamento constitucional Atribución constitucional Alcances de la atribución	Ordinal
	Actividad probatoria	Carga de la prueba Valoración de la versión en colaboración eficaz	
	Potestades jurisdiccionales en el ámbito de la colaboración eficaz	Alcances de las potestades del juez penal Limitaciones de las potestades del Juez Penal	
Afectación del principio de presunción de inocencia.	Sustento constitucional de la presunción de inocencia	La presunción de inocencia como derecho La presunción de inocencia como garantía constitucional	Ordinal
	Quebrantamiento de la presunción de inocencia	La presunción de inocencia y la declaración del colaborador eficaz	

3.3. POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD DE ANÁLISIS

La aplicación de los métodos y técnicas de investigación permitirán recopilar la información necesaria para los efectos de contrastar la hipótesis planteada. Y, siendo así, por la naturaleza del estudio y los efectos de la propuesta a formular, la población estará conformada por jueces, fiscales y abogados de la ciudad de Chiclayo.

De igual forma, la población de estudio estará conformada por 50 individuos entre los cuales se hayan magistrados, es decir Jueces y Fiscales penales de la ciudad de Chiclayo, además de abogados de la defensa, a quienes se procederá a aplicar encuestas innominadas y entrevistas, para obtener mayores datos estadísticos, conforme al sustento teórico a desarrollar en la investigación.

3.4. MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

En primer lugar, cabe señalar que los metodólogos indican claramente que existe una estrecha conexión entre los métodos y las técnicas en la investigación social o jurídica, ya que los primeros son procedimientos que se siguen en la búsqueda de nuevos conocimientos científicos.

Herramientas para recolectar, seleccionar, analizar e interpretar datos que pueden ser probados empíricamente. Ninguno fue identificado, pero el primero le dio al segundo un carácter científico. Por tanto, en la recogida de datos se utilizarán los medios técnicos adecuados, que permitan captar la verdadera dimensión de la pregunta formulada; por tanto, en técnicas de recolección de datos tenemos: observación, bibliografía, archivo, recolección de documentos, encuesta, estadística descriptiva, entrevistas, etc.

3.5. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

Se recurrirá a los siguientes métodos:

Inductivo: El método de inducción pasa de casos especiales a enunciados generales, es decir, se hace un enunciado general a partir de datos o elementos individuales por medio de una síntesis similar, y se explican y comprenden estos casos especiales,

Deducción: La deducción es una orientación de lo general a lo específico; es decir, partes o elementos específicos se pueden desglosar a partir de un enunciado general.

Exégesis o método exegético: también llamada histórica, forma una dirección del pasado al presente, proyectada hacia el futuro; por lo tanto, se utiliza para estudiar los antecedentes, conceptos y objetos de la investigación analítica. Analítica: También se utilizará un análisis sustantivo de la normativa vigente aplicable a la investigación embrionaria en el Perú y otros países. Síntesis: se utiliza para el estudio de realidades problemáticas, teorías y legislación, finalizando con un examen sistemático de toda la información recopilada durante la fase de implementación.

Descriptivo: Intenta responder a cómo se utiliza el tema de investigación que se está desarrollando.

Dogmática: Debe aplicarse un método de investigación jurídica, igualmente dogmático, que no sólo defina la dirección del estudio, sino que también proporcione un criterio encaminado a la integración del material empírico que opera en los conceptos jurídicos. Luego, a través del análisis y la síntesis, determinar los principios generales.

3.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS

Los resultados de la aplicación de las encuestas a la muestra propuesta serán tabuladas y representadas en las respectivas tablas y figuras APA para lo cual se hará uso del programa estadístico SPSS IBM versión 25 en la que se reflejara las respuestas dadas por la muestra, teniendo en cuenta que la investigación tiene enfoque cuantitativo.

IV. RESULTADOS

Habiendo aplicado el instrumento cuestionario que se corresponde a la técnica de encuesta que se propuso para la obtención de datos, la misma que recayó sobre la muestra de carácter no probabilístico consistente en 50 personas especialistas en el área de derecho penal, especialmente con conocimiento del delito de criminalidad organizada que es donde se presenta la mayor incidencia de colaboración eficaz y corrupción de funcionarios, de los cuales fueron 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal, los cuales ejercen el derecho sobre todo en la ciudad de Chiclayo, se han obtenido los datos cuya tabulación se describe en las figuras y tablas que se describen a continuación:

Tabla 02: Colaboración eficaz

¿La colaboración eficaz es un proceso especial autónomo, no contradictorio, basado en el principio del consenso entre las partes y la justicia penal negociada, en el cual el colaborador eficaz proporciona al Fiscal información útil a cambio de beneficios?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Totalmente en desacuerdo	0	0,0	0,0	0,0
En desacuerdo	0	0,0	0,0	0,0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	1	2,0	2,0	2,0
De acuerdo	2	4,0	4,0	4,0
Totalmente de acuerdo	47	94,0	94,0	94,0
Total	50	100,0	100,0	

Fuente: Aplicación de encuestas a la población conformada por 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal.

Interpretación: Del total de encuestados conformado 50 especialistas en el área de derecho penal, especialmente con conocimiento del delito de criminalidad organizada que es donde se presenta la mayor incidencia de colaboración eficaz y corrupción de funcionarios, de los cuales fueron 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal, los cuales ejercen el

derecho sobre todo en la ciudad de Chiclayo que ante la interrogante ¿La colaboración eficaz es un proceso especial autónomo, no contradictorio, basado en el principio del consenso entre las partes y la justicia penal negociada, en el cual el colaborador eficaz proporciona al Fiscal información útil a cambio de beneficios?, el 94% respondió que totalmente de acuerdo, lo cual queda graficado en la figura que se precisa a continuación:

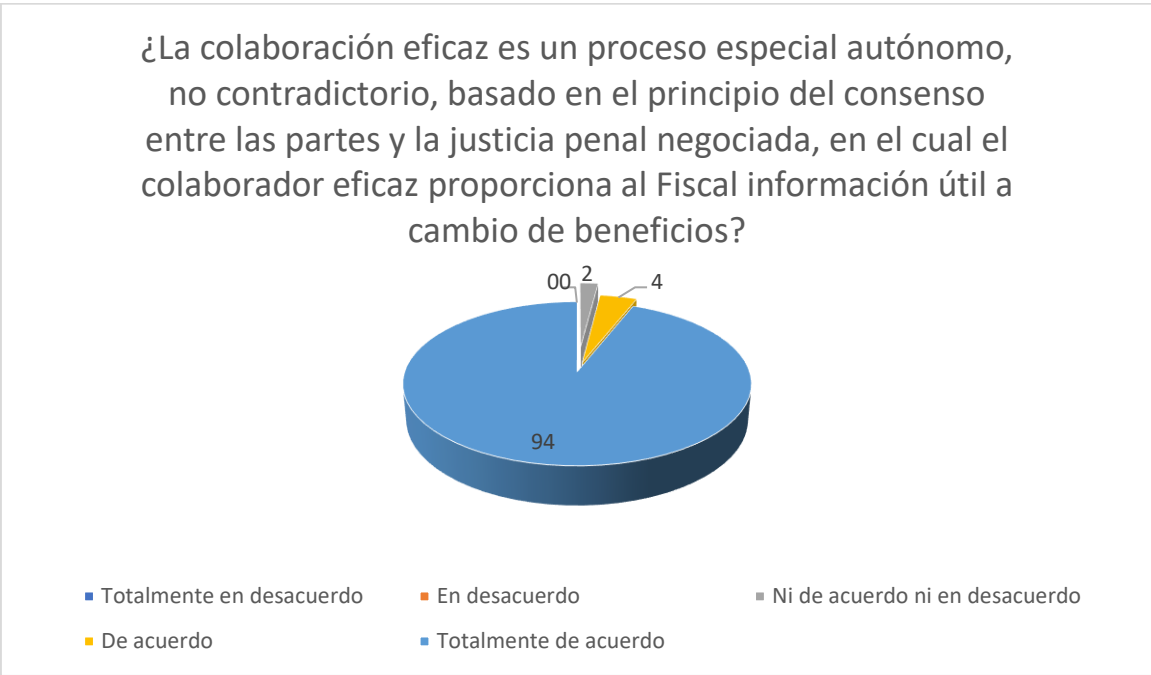


Figura 01: Colaboración eficaz

Fuente: Aplicación de encuestas a la población conformada por 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal.

Tabla 03: Fundamento constitucional de la colaboración eficaz

¿La colaboración eficaz se encuentra reconocida en la constitución?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Totalmente en desacuerdo	50	100,0	100,0	100,0
En desacuerdo	0	0,0	0,0	0,0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0	0,0	0,0	0,0
De acuerdo	0	0,0	0,0	0,0
Totalmente de acuerdo	0	0,0	0,0	0,0
Total	50	100,0	100,0	

Fuente: Aplicación de encuestas a la población conformada por 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal.

Interpretación: Del total de encuestados conformado 50 especialistas en el área de derecho penal, especialmente con conocimiento del delito de criminalidad organizada que es donde se presenta la mayor incidencia de colaboración eficaz y corrupción de funcionarios, de los cuales fueron 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal, los cuales ejercen el derecho sobre todo en la ciudad de Chiclayo que ante la interrogante ¿La colaboración eficaz se encuentra reconocida en la constitución?, el 100% respondió que totalmente en desacuerdo, lo cual queda graficado en la figura que se precisa a continuación:

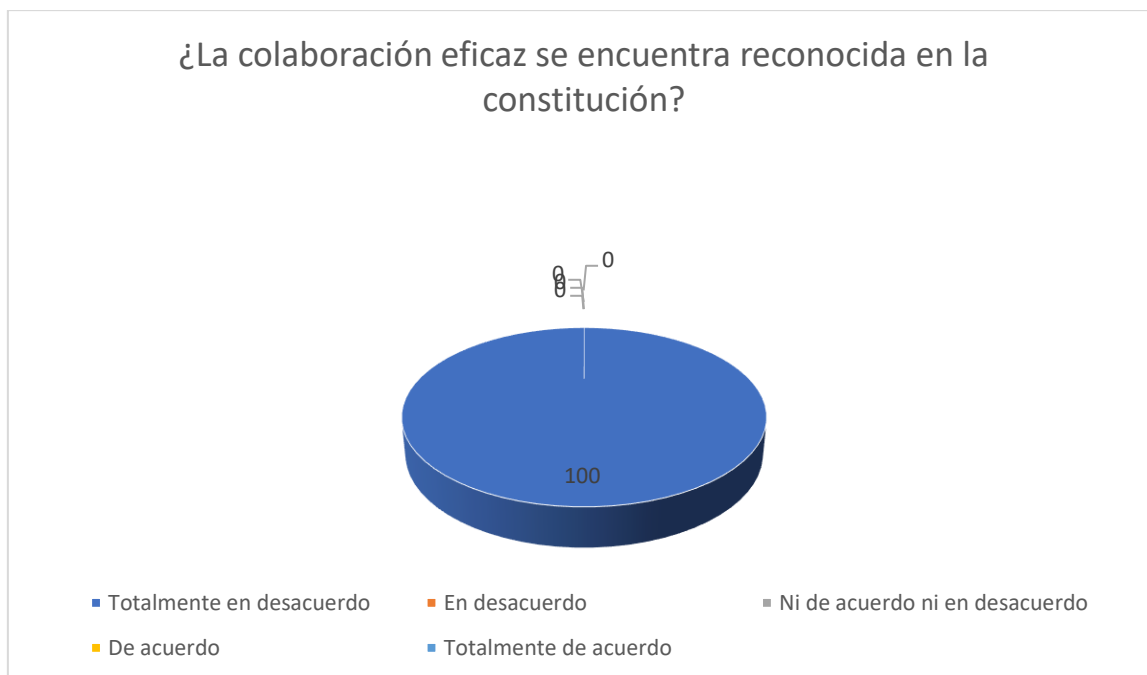


Figura 02: Fundamento constitucional de la colaboración eficaz

Fuente: Aplicación de encuestas a la población conformada por 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal.

Tabla 04: Atribución constitucional del fiscal en la colaboración eficaz

¿Según el artículo 61 numeral 1 del código procesal penal, el fiscal tiene la atribución constitucional de participar en la colaboración eficaz por cuanto se subordina a la Constitución y a la Ley, siendo el director de la investigación?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Totalmente en desacuerdo	0	0,0	0,0	0,0
En desacuerdo	0	0,0	0,0	0,0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	1	2,0	2,0	2,0
De acuerdo	5	10,0	10,0	10,0
Totalmente de acuerdo	44	88,0	88,0	88,0
Total	50	100,0	100,0	

Fuente: Aplicación de encuestas a la población conformada por 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal.

Interpretación: Del total de encuestados conformado 50 especialistas en el área de derecho penal, especialmente con conocimiento del delito de criminalidad organizada que es donde se presenta la mayor incidencia de colaboración eficaz y corrupción de funcionarios, de los cuales fueron 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal, los cuales ejercen el derecho sobre todo en la ciudad de Chiclayo que ante la interrogante ¿Según el artículo 61 numeral 1 del código procesal penal, el fiscal tiene la atribución constitucional de participar en la colaboración eficaz por cuanto se subordina a la Constitución y a la Ley, siendo el director de la investigación?, el 88% respondió que totalmente de acuerdo, lo cual queda graficado en la figura que se precisa a continuación:

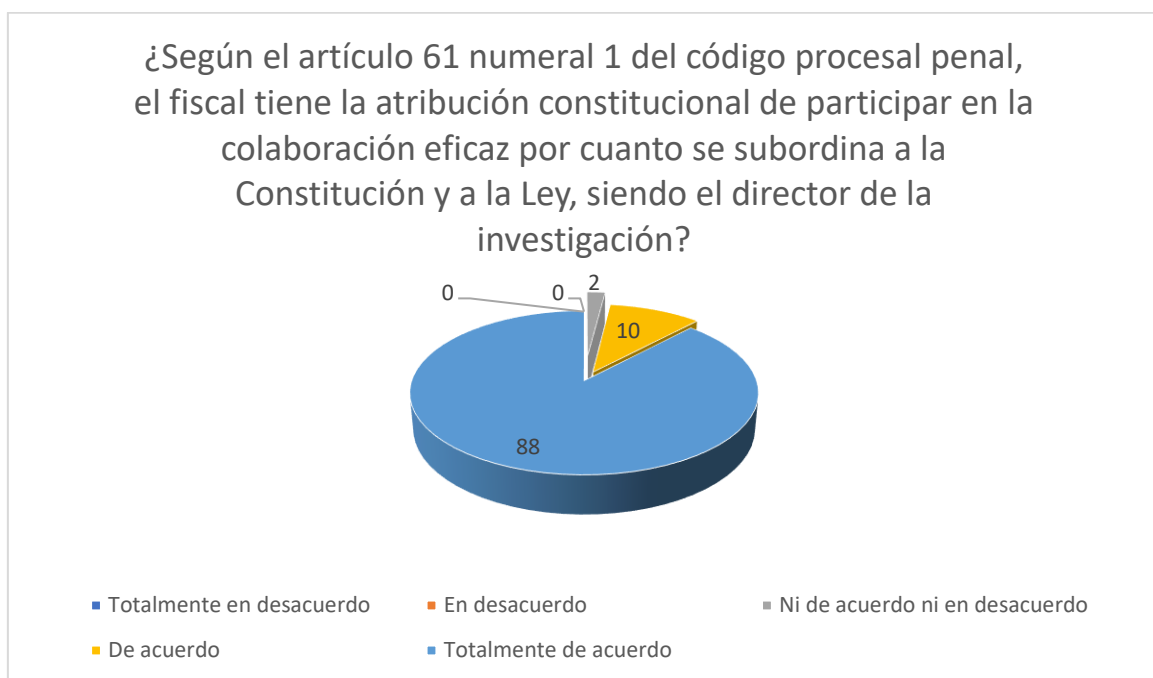


Figura 03: Atribución constitucional del fiscal en la colaboración eficaz

Fuente: Aplicación de encuestas a la población conformada por 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal.

Tabla 05: Alcances de la atribución del fiscal en la colaboración eficaz

¿El fiscal puede otorgar en favor del colaborador la exención de la pena, disminución de la pena, suspensión de la ejecución de la pena, o remisión de la pena para quien la está cumpliendo?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Totalmente en desacuerdo	0	0,0	0,0	0,0
En desacuerdo	1	2,0	2,0	2,0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	3	6,0	6,0	6,0
De acuerdo	5	10,0	10,0	10,0
Totalmente de acuerdo	41	82,0	82,0	82,0
Total	50	100,0	100,0	

Fuente: Aplicación de encuestas a la población conformada por 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal.

Interpretación: Del total de encuestados conformado 50 especialistas en el área de derecho penal, especialmente con conocimiento del delito de criminalidad organizada que es donde se presenta la mayor incidencia de colaboración eficaz y corrupción de funcionarios, de los cuales fueron 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal, los cuales ejercen el derecho sobre todo en la ciudad de Chiclayo que ante la interrogante ¿El fiscal puede otorgar en favor del colaborador la exención de la pena, disminución de la pena, suspensión de la ejecución de la pena, o remisión de la pena para quien la está cumpliendo?, el 82% respondió que totalmente de acuerdo, lo cual queda graficado en la figura que se precisa a continuación:

¿El fiscal puede otorgar en favor del colaborador la exención de la pena, disminución de la pena, suspensión de la ejecución de la pena, o remisión de la pena para quien la está cumpliendo?

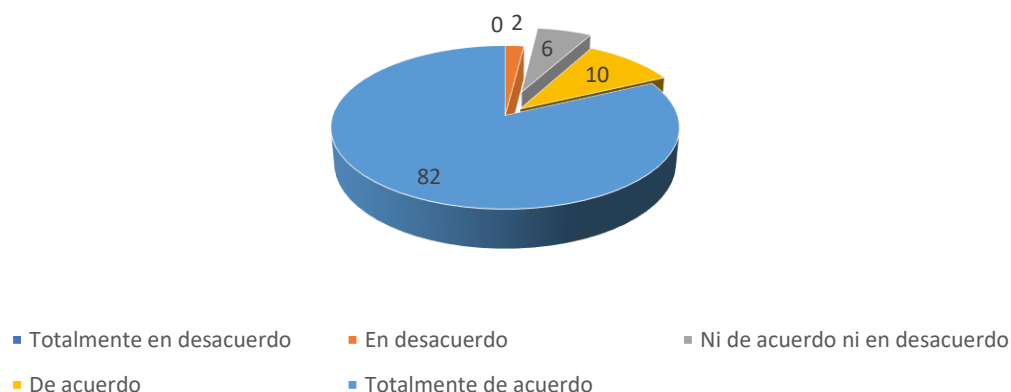


Figura 04: Alcances de la atribución del fiscal en la colaboración eficaz

Fuente: Aplicación de encuestas a la población conformada por 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal.

Tabla 06: Carga de la prueba del colaborador eficaz

¿La carga de la prueba de lo vertido en el cuaderno de colaboración eficaz es de exclusiva responsabilidad del colaborador que tiene que ser corroborado?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Totalmente en desacuerdo	0	0,0	0,0	0,0
En desacuerdo	3	6,0	6,0	6,0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0	0,0	0,0	0,0
De acuerdo	5	10,0	10,0	10,0
Totalmente de acuerdo	42	84,0	84,0	84,0
Total	50	100,0	100,0	

Fuente: Aplicación de encuestas a la población conformada por 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal.

Interpretación: Del total de encuestados conformado 50 especialistas en el área de derecho penal, especialmente con conocimiento del delito de criminalidad organizada que es donde se presenta la mayor incidencia de colaboración eficaz y corrupción de funcionarios, de los cuales fueron 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal, los cuales ejercen el derecho sobre todo en la ciudad de Chiclayo que ante la interrogante ¿ La carga de la prueba de lo vertido en el cuaderno de colaboración eficaz es de exclusiva responsabilidad del colaborador que tiene que ser corroborado?, el 84% respondió que totalmente de acuerdo, lo cual queda graficado en la figura que se precisa a continuación:

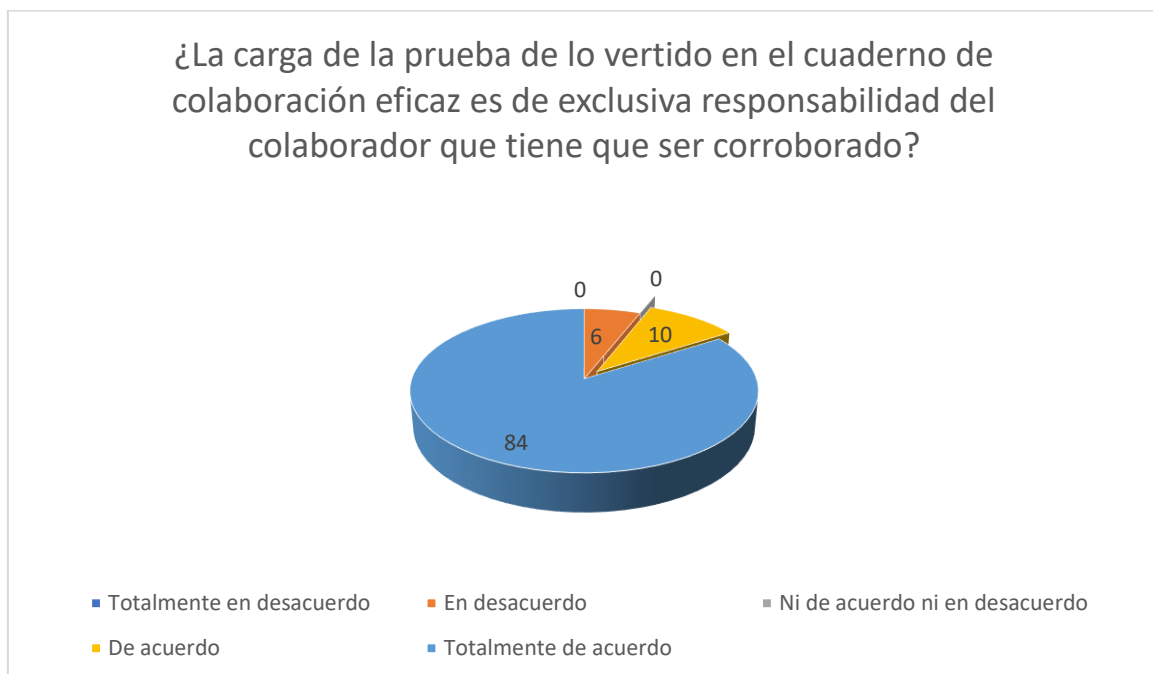


Figura 05: Carga de la prueba del colaborador eficaz

Fuente: Aplicación de encuestas a la población conformada por 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal.

Tabla 07: Valor probatorio de la versión del aspirante a colaborador para dictar prisión preventiva

¿Tiene valor probatorio la versión del aspirante a colaborador para dictar prisión preventiva?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Totalmente en desacuerdo	41	82,0	82,0	82,0
En desacuerdo	3	6,0	6,0	6,0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	6	12,0	12,0	12,0
De acuerdo	0	0,0	0,0	0,0
Totalmente de acuerdo	0	0,0	0,0	0,0
Total	50	100,0	100,0	

Fuente: Aplicación de encuestas a la población conformada por 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal.

Interpretación: Del total de encuestados conformado 50 especialistas en el área de derecho penal, especialmente con conocimiento del delito de criminalidad organizada que es donde se presenta la mayor incidencia de colaboración eficaz y corrupción de funcionarios, de los cuales fueron 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal, los cuales ejercen el derecho sobre todo en la ciudad de Chiclayo que ante la interrogante ¿Tiene valor probatorio la versión del aspirante a colaborador para dictar prisión preventiva?, el 82% respondió que totalmente en desacuerdo, lo cual queda graficado en la figura que se precisa a continuación:

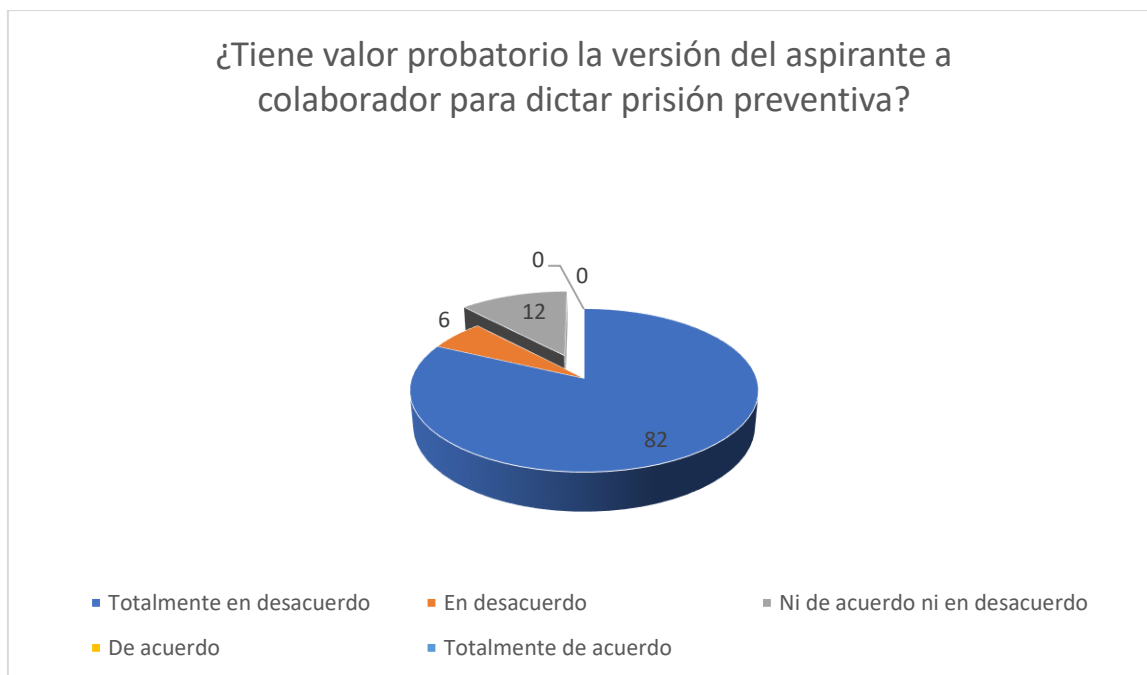


Figura 06: Carga de la prueba del colaborador eficaz

Fuente: Aplicación de encuestas a la población conformada por 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal.

Tabla 08: Valor probatorio de la versión del colaborador para dictar prisión preventiva

¿Tiene valor probatorio la versión del colaborador para dictar prisión preventiva?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Totalmente en desacuerdo	26	52,0	52,0	52,0
En desacuerdo	20	40,0	40,0	40,0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0	0,0	0,0	0,0
De acuerdo	4	8,0	8,0	8,0
Totalmente de acuerdo	0	0,0	0,0	0,0
Total	50	100,0	100,0	

Fuente: Aplicación de encuestas a la población conformada por 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal.

Interpretación: Del total de encuestados conformado 50 especialistas en el área de derecho penal, especialmente con conocimiento del delito de criminalidad organizada que es donde se presenta la mayor incidencia de colaboración eficaz y corrupción de funcionarios, de los cuales fueron 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal, los cuales ejercen el derecho sobre todo en la ciudad de Chiclayo que ante la interrogante ¿Tiene valor probatorio la versión del colaborador para dictar prisión preventiva?, el 52% respondió que totalmente en desacuerdo, lo cual queda graficado en la figura que se precisa a continuación:

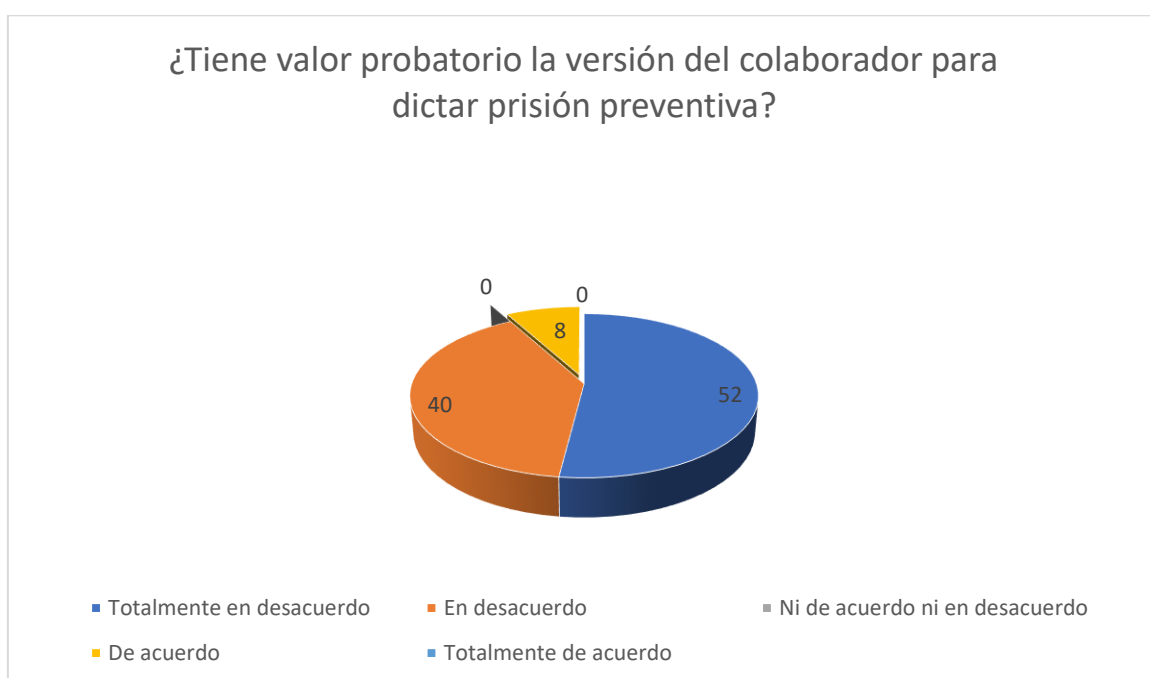


Figura 07: Valor probatorio de la versión del colaborador para dictar prisión preventiva

Fuente: Aplicación de encuestas a la población conformada por 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal.

Tabla 09: Motivo prevalente de la ineficacia del valor probatorio de la versión del aspirante o colaborador para dictar prisión preventiva

¿Cree que el motivo prevalente de la ineficacia del valor probatorio de la versión del aspirante o colaborador para dictar prisión preventiva es que puede mentir?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Totalmente en desacuerdo	1	2,0	2,0	2,0
En desacuerdo	2	4,0	8,0	8,0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4	8,0	16,0	16,0
De acuerdo	4	8,0	16,0	16,0
Totalmente de acuerdo	39	78,0	78,0	78,0
Total	50	100,0	100,0	

Fuente: Aplicación de encuestas a la población conformada por 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal.

Interpretación: Del total de encuestados conformado 50 especialistas en el área de derecho penal, especialmente con conocimiento del delito de criminalidad organizada que es donde se presenta la mayor incidencia de colaboración eficaz y corrupción de funcionarios, de los cuales fueron 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal, los cuales ejercen el derecho sobre todo en la ciudad de Chiclayo que ante la interrogante ¿Cree que el motivo prevalente de la ineficacia del valor probatorio de la versión del aspirante o colaborador para dictar prisión preventiva es que puede mentir?, el 78% respondió que totalmente de acuerdo, lo cual queda graficado en la figura que se precisa a continuación:

¿Cree que el motivo prevalente de la ineficacia del valor probatorio de la versión del aspirante o colaborador para dictar prisión preventiva es que puede mentir?

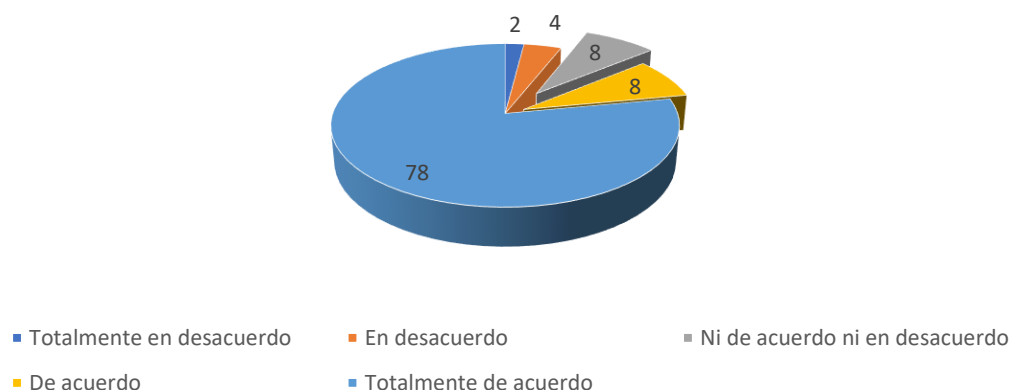


Figura 08: Motivo prevalente de la ineficacia del valor probatorio de la versión del aspirante o colaborador para dictar prisión preventiva

Fuente: Aplicación de encuestas a la población conformada por 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal.

Tabla 10: El Juez de investigación preparatoria y la declaración del aspirante a colaborador

¿Lo declarado por el aspirante a colaborador vincula a la decisión del juez de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Totalmente en desacuerdo	28	56,0	56,0	56,0
En desacuerdo	2	4,0	4,0	4,0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	10	20,0	20,0	20,0
De acuerdo	8	16,0	16,0	16,0
Totalmente de acuerdo	2	4,0	4,0	4,0
Total	50	100,0	100,0	

Fuente: Aplicación de encuestas a la población conformada por 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal.

Interpretación: Del total de encuestados conformado 50 especialistas en el área de derecho penal, especialmente con conocimiento del delito de criminalidad organizada que es donde se presenta la mayor incidencia de colaboración eficaz y corrupción de funcionarios, de los cuales fueron 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal, los cuales ejercen el derecho sobre todo en la ciudad de Chiclayo que ante la interrogante ¿Lo declarado por el aspirante a colaborador vincula a la decisión del juez de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva?, el 56% respondió que totalmente en desacuerdo, lo cual queda graficado en la figura que se precisa a continuación:

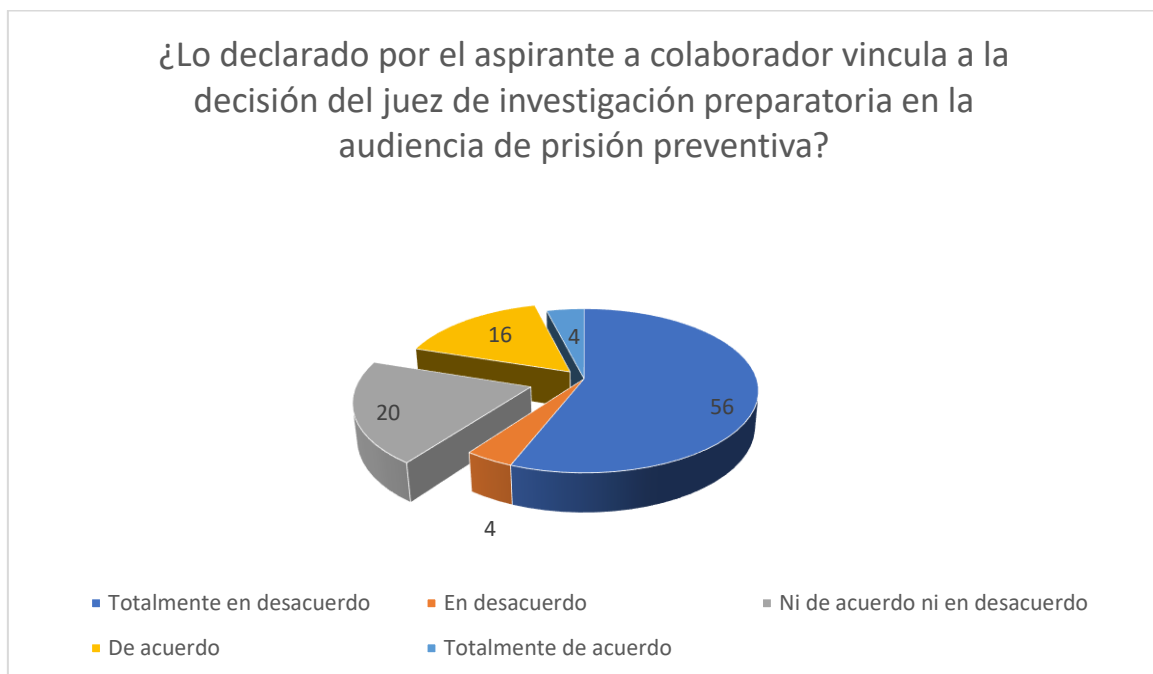


Figura 09: El Juez de investigación preparatoria y la declaración del aspirante a colaborador

Fuente: Aplicación de encuestas a la población conformada por 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal.

Tabla 11: El Juez de investigación preparatoria y la declaración del colaborador

¿Lo declarado por el colaborador vincula a la decisión del juez de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Totalmente en desacuerdo	34	68,0	68,0	68,0
En desacuerdo	5	10,0	10,0	10,0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0	0,0	0,0	0,0
De acuerdo	6	12,0	12,0	12,0
Totalmente de acuerdo	5	10,0	10,0	10,0
Total	50	100,0	100,0	

Fuente: Aplicación de encuestas a la población conformada por 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal.

Interpretación: Del total de encuestados conformado 50 especialistas en el área de derecho penal, especialmente con conocimiento del delito de criminalidad organizada que es donde se presenta la mayor incidencia de colaboración eficaz y corrupción de funcionarios, de los cuales fueron 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal, los cuales ejercen el derecho sobre todo en la ciudad de Chiclayo que ante la interrogante ¿Lo declarado por el colaborador vincula a la decisión del juez de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva?, el 68% respondió que totalmente en desacuerdo, lo cual queda graficado en la figura que se precisa a continuación:

¿Lo declarado por el colaborador vincula a la decisión del juez de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva?

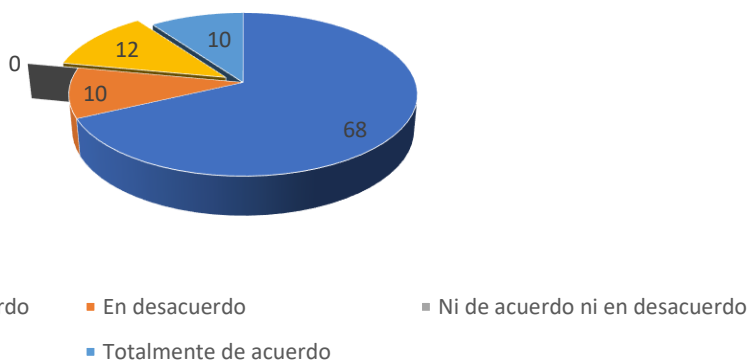


Figura 10: El Juez de investigación preparatoria y la declaración del colaborador

Fuente: Aplicación de encuestas a la población conformada por 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal.

Tabla 12: La presunción de inocencia

¿La presunción de inocencia es el derecho de toda persona investigada o encausada en un proceso penal de ser tratada como inocente hasta la condena?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Totalmente en desacuerdo	0	0,0	0,0	0,0
En desacuerdo	0	0,0	0,0	0,0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	3	6,0	12,0	12,0
De acuerdo	14	28,0	28,0	28,0
Totalmente de acuerdo	33	66,0	66,0	66,0
Total	50	100,0	100,0	

Fuente: Aplicación de encuestas a la población conformada por 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal.

Interpretación: Del total de encuestados conformado 50 especialistas en el área de derecho penal, especialmente con conocimiento del delito de criminalidad organizada que es donde se presenta la mayor incidencia de colaboración eficaz y corrupción de funcionarios, de los cuales fueron 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal, los cuales ejercen el derecho sobre todo en la ciudad de Chiclayo que ante la interrogante ¿La presunción de inocencia es el derecho de toda persona investigada o encausada en un proceso penal de ser tratada como inocente hasta la condena?, el 66% respondió que totalmente de acuerdo, lo cual queda graficado en la figura que se precisa a continuación:

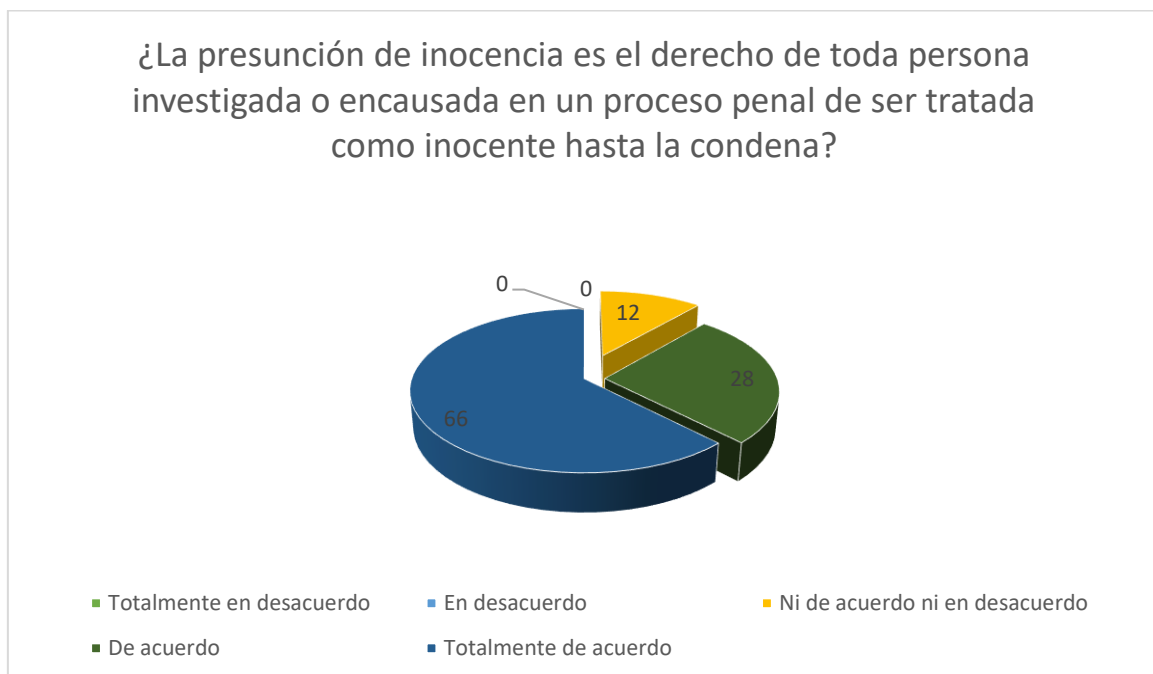


Figura 11: La presunción de inocencia

Fuente: Aplicación de encuestas a la población conformada por 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal.

Tabla 13: La presunción de inocencia y la declaración del aspirante a colaborador en la prisión preventiva

¿La presunción de inocencia se afecta al dictar prisión preventiva sobre la base de la declaración del aspirante a colaborador?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Totalmente en desacuerdo	2	4,0	4,0	4,0
En desacuerdo	1	2,0	2,0	2,0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	1	2,0	2,0	2,0
De acuerdo	1	2,0	2,0	2,0
Totalmente de acuerdo	45	90,0	90,0	90,0
Total	50	100,0	100,0	

Fuente: Aplicación de encuestas a la población conformada por 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal.

Interpretación: Del total de encuestados conformado 50 especialistas en el área de derecho penal, especialmente con conocimiento del delito de criminalidad organizada que es donde se presenta la mayor incidencia de colaboración eficaz y corrupción de funcionarios, de los cuales fueron 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal, los cuales ejercen el derecho sobre todo en la ciudad de Chiclayo que ante la interrogante ¿La presunción de inocencia se afecta al dictar prisión preventiva sobre la base de la declaración del aspirante a colaborador?, el 90% respondió que totalmente de acuerdo, lo cual queda graficado en la figura que se precisa a continuación:

¿La presunción de inocencia se afecta al dictar prisión preventiva sobre la base de la declaración del aspirante a colaborador?

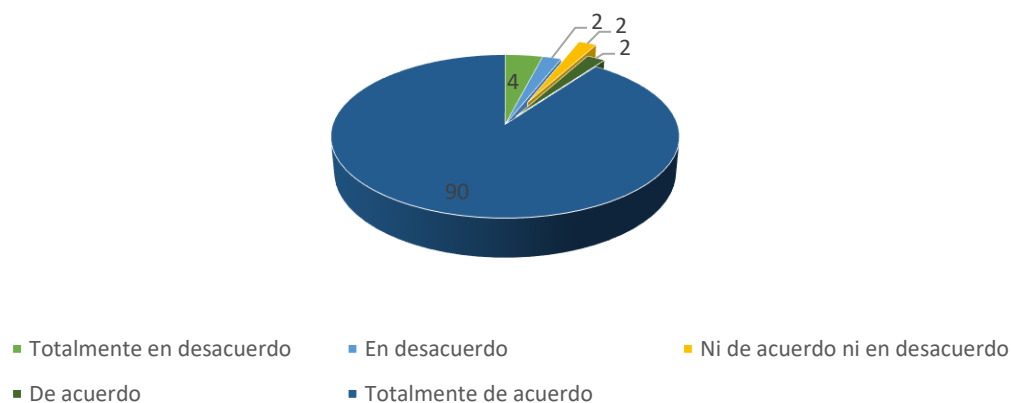


Figura 12: La presunción de inocencia y la declaración del aspirante a colaborador en la prisión preventiva

Fuente: Aplicación de encuestas a la población conformada por 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal.

Tabla 14: La presunción de inocencia y la declaración del colaborador en la prisión preventiva

¿La presunción de inocencia se afecta al dictar prisión preventiva sobre la base de la declaración del colaborador?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Totalmente en desacuerdo	3	6,0	6,0	6,0
En desacuerdo	2	4,0	4,0	4,0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0	0,0	0,0	0,0
De acuerdo	15	30,0	30,0	30,0
Totalmente de acuerdo	30	60,0	60,0	60,0
Total	50	100,0	100,0	

Fuente: Aplicación de encuestas a la población conformada por 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal.

Interpretación: Del total de encuestados conformado 50 especialistas en el área de derecho penal, especialmente con conocimiento del delito de criminalidad organizada que es donde se presenta la mayor incidencia de colaboración eficaz y corrupción de funcionarios, de los cuales fueron 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal, los cuales ejercen el derecho sobre todo en la ciudad de Chiclayo que ante la interrogante ¿La presunción de inocencia se afecta al dictar prisión preventiva sobre la base de la declaración del colaborador?, el 60% respondió que totalmente de acuerdo, lo cual queda graficado en la figura que se precisa a continuación:

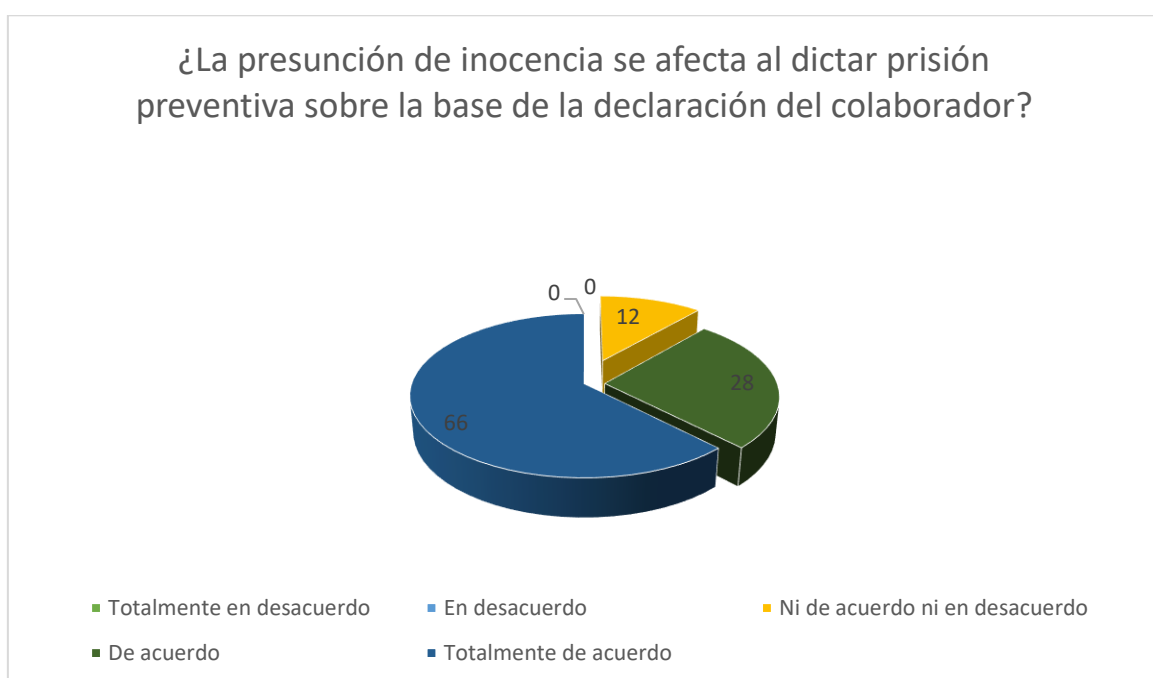


Figura 13: La presunción de inocencia y la declaración del colaborador en la prisión preventiva

Fuente: Aplicación de encuestas a la población conformada por 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal.

V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1. Discusión de resultados y contrastación de hipótesis

Como se mencionó en la parte correspondiente al Marco Metodológico, la investigación tuvo como referente territorial, esto es, el ámbito geográfico en el cual se desarrolló fue la provincia de Chiclayo incidiendo sobre todo en la aplicación del instrumento a fiscales especializados en delitos contra la criminalidad organizada y corrupción de funcionarios que son en los estamentos en los que se presenta una mayor incidencia de cuadernos de colaboración eficaz, cuyos resultados descritos y tabulados se han descrito en el ítem precedente.

La aplicación de la encuesta a la muestra conformado 50 especialistas en el área de derecho penal, especialmente con conocimiento del delito de criminalidad organizada que es donde se presenta la mayor incidencia de colaboración eficaz y corrupción de funcionarios, de los cuales fueron 3 jueces penales, 15 fiscales penales y 32 abogados especializados en materia penal, los cuales ejercen el derecho sobre todo en la ciudad de Chiclayo, dio como resultado lo siguiente:

En relación al primer objetivo específico consistente en analizar los alcances del artículo 158° inciso 2 del Código Procesal Penal, que a la letra señala lo siguiente

“2. En los supuestos de testigos de referencia, declaración de arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas, sólo con otras pruebas que corroboren sus testimonios se podrá imponer al imputado una medida coercitiva o dictar en su contra sentencia condenatoria”, de lo reportado por en el resultado de las tablas 6 donde ante la interrogante ¿ La carga de la prueba de lo vertido en el cuaderno de colaboración eficaz es de exclusiva responsabilidad del colaborador que tiene que ser corroborado?, la posición mayoritaria conformada por el 84% respondió que totalmente de acuerdo; a su vez en la tabla 7, ante la interrogante ¿Tiene valor probatorio la versión del aspirante a colaborador para dictar prisión preventiva?, la posición mayoritaria conformada por el 82% respondió que totalmente en desacuerdo; por otro lado del resultado de la tabla 8, donde ante la pregunta ¿Tiene valor probatorio la versión del colaborador para dictar prisión preventiva?, la posición mayoritaria conformada por el 52% respondió que totalmente en desacuerdo; a su vez, de la tabla 10 se advierte que ante la interrogante ¿Lo declarado por el aspirante a colaborador vincula a la decisión del juez de

investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva?, la posición mayoritaria conformada por el 56% respondió que totalmente en desacuerdo y por último, teniendo a la vista el resultado de la tabla 11 ante la interrogante ¿Lo declarado por el colaborador vincula a la decisión del juez de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva?, la posición mayoritaria que se haya conformada por el 68% respondió que totalmente en desacuerdo; advirtiéndose entonces que no basta para dictar una medida tan gravosa como lo es la prisión preventiva la declaración del aspirante a colaborador como tampoco la del colaborador que ya ha sido materia de control por el juzgado penal competente, siendo que existen dos grandes diferencias, una referida a la declaración de quien es aspirante a ser colaborador, pues éste es un paso previo a la condición de colaborador, teniendo en cuenta que éste último, es la persona sometida o no a una investigación o proceso penal, o que ha sido condenada, que se ha dissociado de la actividad criminal y se presenta ante el Fiscal o acepta la propuesta de este para proporcionar información útil, procurando obtener beneficios premiales, en ese sentido, un breve resumen del procedimiento de ¿cómo se desarrolla el trámite del colaborador? es el que reporta el autor Pachas (2018), cuando indica que Un proceso de cooperación eficaz comienza con un diálogo entre el imputado y el fiscal provincial competente. Conversan, y el acusado se declara culpable del delito investigado, da información a la fiscalía y presenta pruebas para probar lo que dice que quiere probar. Por ahora, está tratando de ser un socio efectivo. Es decir, no ha recibido un veredicto del juez que analizó su información en el despido, explica el citado autor, como en el caso Odebrecht, cuando Jorge Barata (exjefe de Odebrecht) dijo a los fiscales peruanos en febrero. El 28 de enero de 2018 en Brasil, se podría entender que la clase política peruana fue influenciada, pero estas afirmaciones son del solicitante, no del colaborador. Porque no hubo "sentencia de juez que le confiriera la condición de cooperador efectivo". Esta información es fundamental porque el juez garantiza la primera filtración de datos hasta el momento, por lo que cabe agregar que lo dicho no fue acompañado de pruebas adecuadas que sustenten lo dicho por Barata, es decir, por ejemplo el encarcelamiento basado únicamente en el testimonio del solicitante no está de acuerdo con el Artículo 258 numeral 2, artículo 2 del código procesal penal, porque la declaración no se sustenta en otros elementos que crean la facultad de citar al

juez para decidir sobre las medidas preventivas de detención. Otro aspecto interesante de este estudio es que antes del nivel de condena del solicitante, Barata dio, ya había incorporado declaraciones previas dentro del proceso que eran totalmente divergentes, lo cual conlleva a asumir que existía la posibilidad de que en ambos casos se trataba de declaraciones tendenciosas y sin fundamento, puesto que se trataban de mentiras, o se le creía la primera versión o la segunda, o no se le creía nada.

Otro aspecto relevante es que el colaborador si o si debe proporcionar elementos mínimos de corroboración, si ello no ocurre, no es posible ser considerado como colaborador y su *estatus* procesal para obtener beneficios no puede perjudicar a los demás; así los jueces no pueden aprobar de oficio la información de colaboradores efectivos; en cambio, deben ser sustentados por el fiscal ante el juez, y en el proceso de cooperación efectiva, la fiscalía hace una solicitud clara e inequívoca (confirmación de la acción) por las razones anteriores; Pachas (2018) explicó de la siguiente manera; para ilustrar la diferencia entre cooperadores y cooperadores potenciales, si en una solicitud de prisión preventiva la acusación solicita la prisión preventiva y cita la declaración de cooperación especial del solicitante (que es un proceso de prisión preventiva, procesalmente no efectivo cooperación) como un medio para obtener una condena previa al juicio, entendemos que los jueces de prisión preventiva no pueden basar los datos en socios de cooperación efectivos esperanzados en las audiencias previas al juicio. Esto se debe a que el acto de confirmación del juez se expresó sin observar el procedimiento establecido en el Procedimiento Especial, lo que quiere decir, que la declaración de un aspirante no vincula al Juez de investigación Preparatoria a sostener una prisión por cuanto no está corroborada, lo cual se condice con el resultado de la tabla 7 que reporta que ante la interrogante ¿Tiene valor probatorio la versión del aspirante a colaborador para dictar prisión preventiva?, la posición mayoritaria conformada por el 82% respondió que totalmente en desacuerdo.

Así, se llega a otra situación, ¿Qué pasa si la declaración la vertió un colaborador que ya ha sido corroborada?, aquí, es correcto afirmar que aun cuando ya exista una calificación de colaborador y por tanto, la versión ya ha sido corroborada, debe tenerse especial cuidado porque dichos elementos no son prueba, debido a que

solo en juicio se constituyen como prueba y son sometidos a debate, en la audiencia de prisión preventiva se está a nivel de elementos de convicción.

El proceso de colaboración culmina con la sentencia de colaboración cuyo control lo hace el juez, empero no participa el abogado de la defensa, por lo cual, esos elementos de corroboración no son sometidos a contradictorio, si ello es así, a criterio del investigador no se produciría certeza de que aquellos son o no fidedignos o sirven de manera fundamental para probar un hecho porque no son prueba, por tanto, igual como se ha sostenido para el aspirante a colaborador, la declaración del colaborador tampoco serviría para dictar contra el investigado un mandato de prisión preventiva, lo cual se condice con el resultado de la tabulación de la tabla 8 que precisa que ante la interrogante ¿Tiene valor probatorio la versión del colaborador para dictar prisión preventiva?, la posición mayoritaria conformada por el 52% respondió que totalmente en desacuerdo.

A manera de primera pre conclusión es correcto afirmar que tras analizar los alcances del artículo 158° inciso 2 del Código Procesal Penal, referido a que solo se puede dictar una prisión preventiva cuando las declaraciones de los colaboradores han sido corroboradas, los resultados arrojados tras la aplicación del cuestionario, determina que ni la declaración de un aspirante como la de un colaborador servirían para sostener una prisión preventiva.

En cuanto al segundo objetivo específico consistente en establecer si el actual estándar de corroboración establecido en el código procesal penal en las declaraciones de aspirantes a colaborador eficaz para la imposición de prisión preventiva es el adecuado, de la tabla 09 se aprecia que ante la interrogante ¿Cree que el motivo prevalente de la ineficacia del valor probatorio de la versión del aspirante o colaborador para dictar prisión preventiva es que puede mentir?, el 78% respondió que totalmente de acuerdo, lo que significa que el procedimiento de colaboración eficaz es falible, porque es posible que los elementos de corroboración sean otras declaraciones que igualmente traten de conseguir un beneficio, por lo tanto, estarían afectadas por un elemento subjetivo que busca un beneficio a toda costa, pues la norma no hace distinción a que los elementos de corroboración tengan que ser documentos, ruta del dinero, excluyendo otras declaraciones; siendo así, el estadio de corroboración dentro del proceso de colaboración eficaz no garantiza que la declaración brindada a nivel de declaración

sea suficiente para sostener un pedido de prisión preventiva y menos para que se dicte en ese sentido, coincidiendo con Avellaneda (2020) cuando indica que, La cooperación eficaz promueve la aceptación de las acciones arrepentidas y cooperativas del delincuente y, como resultado de su remordimiento, coopera con las autoridades para encontrar los medios apropiados de prevención y disuasión efectiva del delito, ya que este último caso no pudo mitigarlo. infracciones penales anteriormente cometidas como resultado de actividades ilegales, daños.

El marco legal de la corroboración se haya establecido en el artículo 473 del Código Procesal Penal (2004) que establece lo siguiente:

Artículo 473.- Fase de corroboración

1. Recibida la solicitud, el Fiscal podrá disponer el inicio del procedimiento por colaboración eficaz, ordenando las diligencias de corroboración que considere pertinentes para determinar la eficacia de la información proporcionada. En estos casos podrá requerir la intervención de la Policía Nacional del Perú para que, bajo su conducción, realice las indagaciones previas y eleve un Informe Policial.
2. Los procesos, incluyendo las investigaciones preparatorias que se siguen contra el solicitante continuarán con su tramitación correspondiente.
3. El Fiscal, podrá celebrar reuniones con los colaboradores con o sin la presencia de sus abogados. Asimismo, podrá celebrar un Convenio Preparatorio, que precisará -sobre la base de la calidad de información ofrecida y la naturaleza de los cargos o hechos delictuosos objeto de imputación o no contradicción- los beneficios, las obligaciones y el mecanismo de aporte de información y de su corroboración.
4. El colaborador, mientras dure el proceso, de ser el caso, será sometido a las medidas de aseguramiento personal necesarias para garantizar el éxito de las investigaciones, la conclusión exitosa del proceso y su seguridad personal. En caso sea necesario, y siempre que no esté en el ámbito de sus potestades, el Fiscal acudirá al Juez de la Investigación Preparatoria requiriéndole dicte las medidas de coerción y de protección que correspondan, las cuales se dictarán reservadamente y en coordinación con el Fiscal. Dichas medidas también son de aplicación para los representantes, socios e integrantes de la persona jurídica, cuando corresponda.
5. Cuando la medida de aseguramiento personal deba recaer en un colaborador que se encuentra interno en algún establecimiento penitenciario, el Fiscal deberá seguir el procedimiento antes descrito ante el Juez de la

Investigación Preparatoria. Cuando este considere, luego de la evaluación correspondiente, debe establecerse alguna medida de aseguramiento personal que se encuentra dentro de las facultades del Instituto Nacional Penitenciario – INPE, comunica para que proceda conforme a sus atribuciones, quien informa al Juez la medida adoptada.

6. Cuando el colaborador tiene mandato de prisión preventiva el Juez podrá variarlo a solicitud del Fiscal, por el que corresponda; no son aplicables las reglas de cesación previstas para el proceso común. En este caso, la variación procede por razones de seguridad o por ser parte del Convenio Preparatorio y debe motivarse en mínimos actos de investigación realizados en la fase de corroboración; la audiencia es privada y sólo participa el Fiscal, el colaborador y su defensor.

7. Cuando se requiera para las diligencias de corroboración y otras, la conducción del colaborador de un establecimiento penitenciario a otro lugar, el Juez de la Investigación Preparatoria a pedido del Fiscal, podrá disponerlas fijando la fecha de la diligencia y comunicando dentro del plazo no menor de tres (03) días a la Policía Nacional del Perú y al Instituto Nacional Penitenciario para su oportuna ejecución. Culminada la diligencia, el interno retorna al establecimiento penitenciario al cual pertenece.

Así, el propósito de los procedimientos especiales es eliminar las organizaciones criminales y obtener una comprensión clara de cómo y cómo operan, y que la mayoría de las personas que forman esta organización en beneficio de los imputados, brinden información a las autoridades judiciales en la persecución de los delitos. , para cooperar con ellos, para brindarles una ventaja, siempre que la información proporcionada sea útil y veraz, que permita una investigación más eficaz, en este caso, el aspecto más visible de esta figura es la negociación de la justicia penal, el intercambio de beneficios. denunciante a cambio de información real y útil. En definitiva, la colaboración eficaz es útil como proceso coherente con la política criminal encaminada a reducir el crimen organizado, pero se deben tener en cuenta las limitaciones del proceso para que los acusados codemandados no queden en situación de vulnerabilidad. declaración de los colaboradores eficaces, y eso es lo que está pasando, puesto que el proceso se realiza entre el fiscal y el delator, sin participación del abogado defensor, claro está con control judicial, pero sin contradictorio, por lo cual, surge la necesidad de efectuar cambios en la norma

procesal, debido a que solo se admitan como elementos de corroboración aquellos que constituyen efectos palmarios y no versiones de otros colaboradores, porque así como está diseñado el actual procedimiento no garantiza de forma alguna un adecuado sistema que permita constituir un elemento de convicción de una valía tal que a su vez sea suficiente para dictar una prisión preventiva.

A manera de segunda pre conclusión es correcto afirmar que el actual estándar de corroboración establecido en el código procesal penal en las declaraciones de aspirantes a colaborador eficaz para la imposición de prisión preventiva no es el adecuado, porque, su redacción no delimita de forma adecuada que la corroboración excluya otras versiones como únicos elementos para que se confirme la versión del delator, porque en realidad ello no significa corroborar.

En relación al tercer objetivo específico consistente en analizar los alcances del principio de presunción de inocencia, de la tabla 12, ante la interrogante ¿La presunción de inocencia es el derecho de toda persona investigada o encausada en un proceso penal de ser tratada como inocente hasta la condena?, la posición mayoritaria conformada por el 66% respondió que totalmente de acuerdo, asimismo según tabla 13, ante la interrogante ¿La presunción de inocencia se afecta al dictar prisión preventiva sobre la base de la declaración del aspirante a colaborador?, la posición mayoritaria conformada por el 90% respondió que totalmente de acuerdo, mientras que según tabla 14, ante la interrogante ¿La presunción de inocencia se afecta al dictar prisión preventiva sobre la base de la declaración del colaborador?, la posición mayoritaria conformada por el 60% respondió que totalmente de acuerdo, resultados que se condicen con lo reportado por Fernández (2018) en la investigación denominada Prisión preventiva oficiosa y principio de presunción de inocencia, cuyo objetivo fue definir los temas de Prisión Preventiva Oficiosa y Principio de Presunción de Inocencia, donde analizando de fondo la problemática entre la Prisión Preventiva y el Principio de Presunción de Inocencia, luego de aplicar la metodología que propuso, le permitió concluir que la Prisión Preventiva Oficiosa es una medida que en México la ley ha considerado para garantizar la presencia de una persona que se encuentre sujeta a un proceso, esto mediante la Privación de la Libertad violando no solo los derechos fundamentales si no también uno de los Principios más importantes que tiene todo individuo que es acusado por cometer un hecho que la ley considera como delito, que es el Principio de

Presunción de Inocencia, el cual es de suma importancia pues está inserto y considerado en normas internacionales, así, el autor desarrolla lo atinente a la presunción de inocencia que es una garantía inserta en los tratados internacionales, por tanto, no es una minucia su consideración en los momentos en los que se decida una prisión preventiva solo con declaraciones de los colaboradores eficaces, lo cual ha quedado validado con el resultado de las encuestas aplicadas dado que de las tablas expresadas en el desarrollo del presente análisis incide en que, tomar en cuenta tanto las declaraciones de los aspirantes como de los colaboradores para dictar una medida de prisión preventiva afectan la denominada presunción de inocencia que según la muestra a la cual se aplicó la encuesta determina que ante la interrogante ¿La presunción de inocencia es el derecho de toda persona investigada o encausada en un proceso penal de ser tratada como inocente hasta la condena?, la posición mayoritaria conformada por el 66% respondió que totalmente de acuerdo, asimismo ante la interrogante ¿La presunción de inocencia se afecta al dictar prisión preventiva sobre la base de la declaración del aspirante a colaborador?, la posición mayoritaria conformada por el 90% respondió que totalmente de acuerdo, mientras que ante la interrogante ¿La presunción de inocencia se afecta al dictar prisión preventiva sobre la base de la declaración del colaborador?, la posición mayoritaria conformada por el 60% respondió que totalmente de acuerdo; siendo así los alcances de la presunción de inocencia en la prisión preventiva es tan amplia que ni siquiera con las versiones de los aspirantes ni colaboradores eficaces se perjudica.

A manera de tercera pre conclusión respecto al objetivo consistente en analizar los alcances del principio de presunción de inocencia, se concluye que la presunción de inocencia es un derecho que tiene toda persona investigada o encausada en un proceso penal de ser tratada como inocente hasta la condena; es decir, solo después de realizarse una correcta actuación probatoria se derriba y se convierte el acusado en condenado sin que exista duda alguna o razonable de que existe el delito y que existe conexión entre éste y la imputación.

En cuanto al objetivo general consistente en determinar si la aplicación del artículo 158° inciso 2 del Código Procesal Penal, respecto a la valoración de las declaraciones de aspirantes a colaborador eficaz en la prisión preventiva afecta el

principio de presunción de inocencia, es correcto afirmar que el expresado artículo que precisa que para dictar una prisión preventiva se debe tener en cuenta otras pruebas que corroboren sus testimonios, pero no indica que tipo de prueba, siendo que los testimonios también pueden corroborar otro testimonio.

En sistemas donde la cultura es eficaz para considerar que un testimonio es prueba plena por ser considerada prueba estrella, en una cultura como la peruana, un testimonio siempre debe valorarse con reserva, y sobre todo cuando tal se produce dentro de un contexto de delación. Así, de los objetivos específicos se han determinado como conclusiones que tras analizar los alcances del artículo 158° inciso 2 del Código Procesal Penal, se tiene tras la aplicación del cuestionario, determina que ni la declaración de un aspirante ni la de colaborador propiamente calificado servirían para dictar una prisión preventiva, tal como así se condice con el resultado de la tabla 7 que reporta que ante la interrogante ¿Tiene valor probatorio la versión del aspirante a colaborador para dictar prisión preventiva?, la posición mayoritaria conformada por el 82% respondió que totalmente en desacuerdo, asimismo el resultado de la tabla 12, ante la interrogante consistente en ¿La presunción de inocencia es el derecho de toda persona investigada o encausada en un proceso penal de ser tratada como inocente hasta la condena?, la posición mayoritaria conformada por el 66% respondió que totalmente de acuerdo, asimismo según tabla 13, ante la interrogante ¿La presunción de inocencia se afecta al dictar prisión preventiva sobre la base de la declaración del aspirante a colaborador?, la posición mayoritaria conformada por el 90% respondió que totalmente de acuerdo, mientras que según tabla 14, ante la interrogante ¿La presunción de inocencia se afecta al dictar prisión preventiva sobre la base de la declaración del colaborador?, la posición mayoritaria conformada por el 60% respondió que totalmente de acuerdo, lo cual significa que dictar una prisión preventiva basándose solo en las declaraciones de aspirantes si afecta el derecho a la presunción de inocencia.

A manera de pre conclusión relativa al objetivo general consistente en determinar si la aplicación del artículo 158° inciso 2 del Código Procesal Penal, respecto a la valoración de las declaraciones de aspirantes a colaborador eficaz en la prisión preventiva afecta el principio de presunción de inocencia, se tiene que aun cuando es una regla judicial que ante el requerimiento de prisión preventiva se declaren

fundados con las declaraciones brindadas en los procesos de delación, llámese tanto de aspirantes como de colaboradores calificados, existe una afectación a la garantía de presunción de inocencia debido a que el grado de aspirante a colaborador no garantiza que la declaración sea cierta, que ni siquiera se refuerza con la declaración ya corroborada debido a que el procedimiento como tal, tiene serias falencias, como lo es, el que no se asegura que los elementos corroborativos sean de índole material, porque pueden ser incluso otras declaraciones de otros colaboradores que incluso pueden tener versiones contradictorias, por lo cual, si se afecta el derecho a la presunción de inocencia de la cual se encuentra premunido toda persona que es sujeto de una imputación.

Así, integrando el resultado de las pre conclusiones arribadas como los precisados en los resultados de las distintas tablas que van de 2 al 14, advirtiendo que la hipótesis nula estaría descrita de la siguiente forma: **Si la aplicación adecuada del artículo 158 inciso 2 del Código Procesal Penal, NO consiste en una corroboración de la declaración del colaborador que excluya otras declaraciones entonces no se evitará afectar el principio de presunción de inocencia, se ha visto derribada debido a que ha quedado demostrado que la aplicación adecuada del artículo 158 inciso 2 del Código Procesal Penal, consiste en una corroboración de la declaración del colaborador que excluya otras declaraciones entonces se evitará afectar el principio de presunción de inocencia**, por lo tanto, la hipótesis alternativa planteada en el proyecto de investigación y delimitada en el presente informe ha quedado validada, al haberse demostrado que no se ha delimitado de manera adecuada el proceso de corroboración de la declaración de colaborador eficaz tanto en su insípida versión que es la de aspirante como la de colaborador propiamente dicho, porque en ninguno de los dos casos se tiene garantía que esa corroboración se produzca dentro de los cánones de la certeza, además que no garantiza que el delator no este mintiendo, porque no se asegura que se usen como medios de corroboración otros distintos a declaraciones, puesto que las declaraciones en este tipo de procesos se encuentran debilitadas en su esencia de convicción, coincidiendo en ese sentido con las conclusiones arribadas por Paéz (2017), cuando haciendo un análisis sobre la legislación de Ecuador, tras estudiar la denominada figura que se

denomina “cooperación eficaz” regulada en el art. 491º del Código Orgánico Integral Penal como “(...) el acuerdo de suministros de datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan necesariamente al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables o sirvan para prevenir, neutralizar o impedir la perpetración o consumación de otros delitos de igual o mayor gravedad” y ha tenido gran relevancia en el combate en delitos contra el narcotráfico y otros delitos como corrupción de funcionarios, determina que su fundamento son cuestiones pragmáticas que no ha considerado problemas como la discrecionalidad punitiva a otorgarse y el criterio de valoración sobre la eficacia de la información que aportó el colaborador, es decir, no es argumento válido la delación que proporciona ni el aspirante ni el colaborador ya sentenciado (calificado como tal).

CONCLUSIONES

Determinar si la aplicación del artículo 158° inciso 2 del Código Procesal Penal, respecto a la valoración de las declaraciones de aspirantes a colaborador eficaz en la prisión preventiva afecta el principio de presunción de inocencia.

1.6.2. Objetivos específicos

- a)** Analizar los alcances del artículo 158° inciso 2 del Código Procesal Penal
- b)** Establecer si el actual estándar de corroboración establecido en el código procesal penal en las declaraciones de aspirantes a colaborador eficaz para la imposición de prisión preventiva es el adecuado. Analizar los alcances del principio de presunción de inocencia.
- c)** Analizar los alcances del principio de presunción de inocencia.

1. Se ha llegado a determinar que la aplicación del artículo 158° inciso 2 del Código Procesal Penal, en su redacción actual respecto a la valoración de las declaraciones de aspirantes a colaborador eficaz para imponer una prisión preventiva si afecta el principio de presunción de inocencia, debido a que las decisiones judiciales no se subordinan a éste último, debido a que la norma precisada no establece de forma textual y explícita que las corroboraciones a considerarse para aplicar una medida coercitiva tenga que ser prueba material, lo que ha conllevado que en la práctica esa corroboración se sustente en otras declaraciones de delatores cuya incidencia se produce dentro de un contexto que puede desvanecerse con el discurrir del tiempo.
2. Tras analizar los alcances del artículo 158° inciso 2 del Código Procesal Penal, se advierte que tiene distintas consecuencias dentro del proceso penal; sin embargo, en lo referido a la aplicación de una medida coercitiva como lo es una prisión preventiva, los resultados arrojados luego de la aplicación del cuestionario, determina que la redacción actual del artículo referido, permite que la declaración de un aspirante como la de un colaborador, que no deberían servir para sustentar el otorgamiento de una prisión preventiva, en realidad si lo hacen, afectando con ello la presunción de inocencia.
3. Luego de analizar el actual estándar de corroboración establecido en el código procesal penal para las declaraciones de aspirantes a colaborador eficaz que permitan la imposición de prisión preventiva, se ha establecido que no es el

adecuado, debido a que la redacción de la valoración de las declaraciones establecidas en el artículo 158 numeral 2 del citado sistema procesal penal, no delimita de forma adecuada que la corroboración excluya otras versiones como elementos para que se confirme la versión del delator y sirva para otorgar una medida de prisión, porque ello no constituye en esencia que se ha corroborado la declaración.

4. Tras analizar los alcances del principio de presunción de inocencia, se concluye que tal es una garantía de la función jurisdiccional constituido por el derecho que tiene toda persona investigada o encausada en un proceso penal de ser tratada como inocente hasta la condena; es decir, solo después de realizarse una correcta actuación probatoria se derriba y se convierte el acusado en condenado sin que exista duda alguna o razonable de la existencia del delito y que existe conexión entre éste y la imputación, por lo tanto, con la delación premiada constituida por la colaboración eficaz en el proceso de corroboración por otra versión de otro delator, no asegura que cualquier de tales este mintiendo, por lo que, al dictarse una prisión solo con las delaciones se afectan los alcances de la presunción de inocencia.

RECOMENDACIONES

1. Promover la modificatoria del artículo 158° inciso 2 del Código Procesal Penal, que delimite que la corroboración del delator para dictar una medida de protección no se produce con otras declaraciones.
2. Promover la modificación del artículo 473 del Código Procesal Penal que en la fase de corroboración incluya la prohibición que otras declaraciones de delatores sirven para corroborar la declaración otros colaboradores.

REFERENCIAS

- Alcántara, G. (2018). La colaboración eficaz en la lucha contra la criminalidad organizada: especial referencia a la corroboración de lo dicho por un colaborador. En Revista de Gaceta Penal y Procesal Penal – Edición Julio 2018 (pp. 116-124).
- Ascencio, J. (2005). El nuevo proceso penal - Estudios Fundamentales. Palestra editores. Lima: Perú.
- Asencio, J. (2018). La regulación de la prisión preventiva en el Código Procesal Penal del Perú. <http://www.incipp.org.pe/archivos/publicaciones/regulacionprisionpreventiva.pdf>
- Avellaneda, S. (2020). Proceso por colaboración eficaz del decreto legislativo 1301 y el derecho de defensa de los coimputados en el nuevo código procesal penal. Recuperado de <https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/7956/Avellana%20Bautista%2c%20Suhgey%20Mavila.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Castillo, J. (2018). La presunción de inocencia como regla de tratamiento. Editorial Ideas.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2004a). Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004 (Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas).
- De Gennaro-Dyer, P. (2018). Perspectivas sobre la colaboración eficaz de personas jurídicas. [Tesis de bachiller inédita]. Universidad de Piura.
- Fernández, D. (2018). Prisión preventiva oficiosa y principio de presunción de inocencia. [Tesis para obtener título de abogado, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo]. Repositorio institucional de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. <http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/bitstream/handle/231104/2448/Prisi%C3%B3n%20preventiva%20oficiosa%20y%20principio%20de%20presunci%C3%B3n%20de%20inocencia..pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Ferrer, J. (2007). La valoración racional de la prueba. Marcial Pons. Madrid; España.

- Horna, M. (2018). La aplicación del proceso de colaboración eficaz en el distrito judicial de Lambayeque en los años 2016 – 2017. Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo. Recuperado de <http://repositorio.unprg.edu.pe/handle/UNPRG/7917>
- Maier, J. (2016). Derecho procesal penal (t. 1). Ad-Hoc.
- Mondragón, G. (2019). El colaborador eficaz y la desarticulación de las organizaciones criminales, en la ciudad de Jaén, 2016. Universidad Particular de Chiclayo.
- Moreno, V. (2008). Los elementos probatorios obtenidos con la afectación de derechos fundamentales durante la investigación penal. Tirant lo Blanch. Valencia: España.
- Nakazaki, C. (2015). ¿Valor probatorio de los testimonios de los colaboradores eficaces? La Ley-El Ángulo Legal de la Noticia (Gaceta Penal & Procesal Penal). <http://laley.pe/not/2797/-valor-probatorio-de-los-testimonios-de-los-colaboradores-eficaces->
- Nieva, J. (2013). La duda en el proceso penal. Marcial Pons.
- Paéz, P. (2017). La cooperación eficaz y sus problemas con la impunidad. LegalToday. Recuperado de <https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derechointernacional/internacional/la-cooperacion-eficaz-y-sus-problemas-con-laimpunidad-2017-10-11/>
- Popper, K. (1973). El desarrollo del conocimiento científico. Conjeturas y refutaciones, 1963. Traducción de Míguez, Paidós. Buenos Aires: Argentina.
- Roxin, C. (2000). Derecho Procesal Penal. Traducción de la 25 edición alemana por Gabriela E Córdoba y Daniel R. Pastor. Revisada por Julio B.J. Maier. Editores del Puerto. Buenos Aires: Argentina.
- Sánchez, V. (2011). La colaboración eficaz en el Nuevo Código Procesal Penal. En Revista Jurídica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (2011) Estudios sobre la corrupción y la criminalidad organizada transnacional. <https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2014/01/Revista-CDJE-2011-Interiores.pdf>
- San Martín, C. (2015). Derecho procesal penal (vol. 1). Grijley. Lima: Perú.
- Sumarán, W. (2019). La valoración de las declaraciones de aspirantes a colaborador eficaz en las resoluciones judiciales de prisión preventiva y su

incidencia en el principio de presunción de inocencia. [Tesis para obtener el título de abogado, Universidad Privada del Norte]. Repositorio institucional de la Universidad Privada del Norte
<https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/23182/Sumaran%20Layza%20Willam%20Jhonatan.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

ANEXOS

Anexo 1: Matriz de consistencia

<p align="center">TITULO</p> <p align="center">DECLARACION DEL COLABORADOR EFICAZ COMO ELEMENTO DE CONVICCIÓN PARA LA PRISIÓN PREVENTIVA Y SU AFECTACIÓN A LA PRESUNCION DE INOCENCIA</p>	
<p align="center">FORMULACION DEL PROBLEMA</p> <p align="center">¿La aplicación del artículo 158° inciso 2 del Código Procesal Penal, respecto a la valoración de las declaraciones de aspirantes a colaborador eficaz para imponer una prisión preventiva, afecta el principio de presunción de inocencia?</p>	
<p align="center">OBJETIVO GENERAL</p> <p align="center">Determinar si la aplicación del artículo 158° inciso 2 del Código Procesal Penal, respecto a la valoración de las declaraciones de aspirantes a colaborador eficaz en la prisión preventiva afecta el principio de presunción de inocencia.</p>	
<p align="center">Marco Teórico</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Colaboración eficaz. 2. Prisión preventiva 3. Presunción de inocencia. 	<p align="center">Trabajo de Campo</p> <p>Aplicación de encuestas a un total de 50 especialistas en derecho penal entre los cuales se hayan magistrados, es decir Jueces y Fiscales penales de la ciudad de Chiclayo, además de abogados de la defensa.</p>
<p align="center">OBJETIVOS ESPECIFICOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analizar los alcances del artículo 158° inciso 2 del Código Procesal Penal 2. Establecer si el actual estándar de corroboración establecido en el código procesal penal en las declaraciones de aspirantes a colaborador eficaz para la imposición de prisión preventiva es el adecuado. 3. Analizar los alcances del principio de presunción de inocencia 	
<p align="center">HIPOTESIS</p> <p>Hi: Si la aplicación adecuada del artículo 158 inciso 2 del Código Procesal Penal, consiste en una corroboración de la declaración del colaborador que excluya otras declaraciones entonces se evitará afectar el principio de presunción de inocencia.</p> <p>H0: Si la aplicación adecuada del artículo 158 inciso 2 del Código Procesal Penal, NO consiste en una corroboración de la declaración del colaborador que excluya otras declaraciones entonces no se evitará afectar el principio de presunción de inocencia.</p>	
<p align="center">POBLACION</p> <p>Especialistas en derecho penal de entre los cuales son Jueces y Fiscales penales de la ciudad de Chiclayo, además de abogados de la defensa, a quienes se procederá a aplicar encuestas innominadas y entrevistas, para obtener mayores datos estadísticos, conforme al sustento teórico a desarrollar en la investigación.</p>	<p align="center">MUESTRA</p> <p>Conformada por 50 especialistas en derecho penal entre los cuales se hayan magistrados, es decir Jueces y Fiscales penales de la ciudad de Chiclayo, además de abogados de la defensa, a quienes se procederá a aplicar encuestas innominadas.</p>